

N.º 392
30 de mayo
de 2024
Apoyo:
1,5 € - 2 €

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

REDACCIÓN
y ADMINISTRACIÓN:
C/ Desengaño 12, 1º3-A
28004 Madrid
TEL: 91 522 23 56
io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

República

es ¡no a la guerra! ¡no al genocidio!



Más armas para Ucrania para continuar la matanza

A graphic featuring a stylized black and white logo of a hand holding a torch, with the text '16J' in large red letters below it. To the right, a person is shown holding a large flag with horizontal stripes of red, white, green, and purple. Below the logo and flag, the text 'MARCHA REPUBLICANA' is written in bold black letters, with 'página 7' in red below it.

16J
MARCHA REPUBLICANA
página 7

EDITORIAL

¡Todos y todas a la marcha republicana del 16 de junio!

Este martes 28 de mayo, Pedro Sánchez anuncia el reconocimiento del «Estado de Palestina», un Estado que no existe, además de estar ocupados los territorios que se le atribuyen -que, como mucho, llegarían a un 22% de la Palestina histórica- por el Ejército israelí y fragmentados por decenas de asentamientos judíos, en los que viven 550.000 ciudadanos israelíes (a los que hay que sumar más de 200.000 en Jerusalén Este). Colonos y Ejército que someten a la población palestina a una continua presión y humillación, privándola de los derechos más elementales. Además, sólo desde el 7 de octubre, más de 400 palestinos han sido asesinados en Cisjordania por soldados y colonos.

Este reconocimiento, que solo ha sido seguido en Europa por dos países «periféricos», Irlanda y Noruega, tiene un evidente objetivo electoral. Pero cubre el mantenimiento del apoyo a Israel, nuestro buen aliado según el Ministerio de Exteriores. El apoyo que la solidaridad más elemental requiere es romper todo tipo de relaciones con Israel, como exigen los estudiantes y, según las encuestas, el 78% de la población.

A pesar de que en 2014, el Congreso de los Diputados solicitó al Gobierno de Mariano Rajoy el reconocimiento del Estado palestino, prácticamente por unanimidad (319 votos a favor, una abstención y dos noes), ahora los partidos franquistas se oponen. Para ellos no hay genocidio, y nada puede poner en duda la ley impuesta por Biden y aplicada por Netanyahu. Para los franquistas, erigidos en los más fieles defensores del orden imperialista, cualquier distanciamiento de Netanyahu es inadmisibles.

Cómo es inadmisibles el voto del Congreso de la amnistía, previsto para el 30 de mayo, porque -a pesar de su carácter limitado y su previsible tramitación azarosa- pone en jaque la autoridad del poder judicial, y de la monarquía que animó su persecución contra los catalanes. Sin duda, el interés del Gobierno y de su proyecto no era cuestionar la monarquía, sino operar una mínima reforma para hacer entrar en la gobernabilidad a todas las fuerzas políticas, en este caso los soberanistas catalanes, pero esto es inadmisibles para el franquismo institucional y para el franquismo político. Por esto Feijóo, coreado críticamente por Abascal, volvió a la carga, convocando de nuevo una manifestación contra la amnistía este domingo 26.

Todo derecho, todo avance en libertades, choca con las instituciones y la monarquía

No nos engañemos. Detrás del rifirrafe del Congreso, por otro lado muy alejado de la vida real de la población, se oculta la incompatibilidad entre democracia y monarquía. Y esto afecta no solo a los pueblos, sino a los trabajadores y la juventud. De nuevo se anuncia que sus pensiones son insostenibles, y que es necesario un nuevo plan de ajuste. Pretenden utilizar la campaña electoral al fantasmagórico Parlamento Europeo para intentar convalidar esta política.

Para la juventud estudiantil se ratifica que no hay salida. En Catalunya el 67% de los jóvenes del MIR piensan que tendrán que emigrar, y a los trabajadores de Alcoa y otras grandes industrias solo se les promete buenas condiciones de despido.

El apoyo de las instituciones de la Unión Europea a la monarquía y al poder judicial aparece en su esplendor. Unas instituciones que solo ofrecen como salida la guerra, el aumento de los gastos militares y actualizar las normas de ajuste europeo.

Por ello, aunar fuerzas en la lucha contra el régimen y la política de los Gobiernos que se someten a él es de absoluta actualidad.

Este es el sentido de nuestro apoyo a la Marcha Republicana del 16 de junio en Madrid.

La lucha contra la «desindustrialización»

página 3



Madrid sigue en pie por la sanidad pública

página 4



Primeros firmantes del Llamamiento Europeo contra la Guerra

página 6



El Tribunal Penal Internacional solicita orden de arresto de Netanyahu

página 12



Ante el anunciado plan de ajuste

El Gobierno ha aireado, ufanándose incluso, las previsiones del informe de primavera de la UE para España. La Comisión Europea estima que el PIB español crecerá un 2,1% en 2024 y otro 1,9% en 2025, lo que supone un crecimiento superior a la media de la eurozona, que aumentaría su producto interior bruto un 0,8% en 2024 y un 1,4% en 2025.

La Unión Europea ha vuelto a aplicar las reglas fiscales (sobre los niveles de déficit y deuda públicos) este 2024, y en su informe también mejora la previsión sobre el déficit presupuestario de España para 2024, rebajándolo al 3% del PIB. Lo que permite al Gobierno afirmar que España no entrará en el grupo de países a los que Bruselas abriría un expediente sancionador por «déficit excesivo» en junio.

Sobre esto último, preguntado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, evitó definirse: «el 19 de junio presentaremos nuestro informe sobre los países que incumplieron el umbral del 3% del PIB en 2023. En el caso de España en 2023 fue el 3,6%. Prepararemos el documento para todos los países que estaban por encima del 3% en 2023, los once, evaluando todos los objetivos y factores relevantes. No puedo prejuzgar la conclusión de esa evaluación».

Los ricos, más ricos; los pobres, más pobres

Toda esta alharaca del Gobierno no puede ocultar que el incremento del PIB (productos y servicios nuevos creados en un año) se distribuye muy desigualmente. No hace falta recordar los rampantes beneficios de bancos y multinacionales en España, que no reinvierten aquí, sino que van a parar en su mayor parte a inversiones en empresas radicadas en los Estados Unidos. Beneficios que contrastan con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios: según el cuadro de evolución

sociolaboral de marzo de 2024 del Servicio de Estudios de la UGT, los salarios habrían perdido un 6,3% de su poder de compra en los últimos 3 años. Y, según la encuesta de condiciones de vida del año 2023 del INE, los porcentajes de pobreza aumentaron respecto a 2022: el 26,5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social; el 9% de la población se encuentra en situación de carencia material y social severa, y el 9,3% de la población llegó a fin de mes con «mucha dificultad».

Deuda pública y recortes

El día siguiente a que se hiciera público el informe de la UE, el editorial de *Expansión* concluía así: «El acelerón del crecimiento no conllevará, sin embargo, una mejora considerable de los niveles de paro, que seguirá en el entorno del 11% a final de 2025 de acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, ni de deuda pública, estancada por encima del 104% del PIB [...] y que obligará a realizar un ajuste presupuestario más intenso para cumplir las nuevas reglas fiscales de la UE».

Haya o no procedimiento por déficit excesivo para España, el entramado burocrático «europeo» de Bruselas, al servicio del capital financiero, deja todas las puertas abiertas a la doble interpretación para que algunos, contrariamente a la realidad, nos hablen de flexibilidad en el ajuste, de recortes que no afectarán al «crecimiento», ni a los «derechos sociales» en la UE, bla, bla, bla. En fin, hacer compatible la política de guerra y los recortes con el bienestar, la cuadratura del círculo.

El plan de ajuste

Ciertamente, la clave del ajuste exigido por la UE está en la deuda pública. Según la CE, la deuda pública de España será del 105,5% del PIB en 2024 y del 104,8% en 2025, una de las más altas de la UE. Recordemos que

el máximo de deuda según las reglas fiscales de la UE debe ser del 60% del PIB, y que las previsiones de deuda media a corto plazo para la zona euro son del 90%. Según esas mismas reglas, en septiembre los países han de presentar sus planes de ajuste fiscal para los próximos cuatro años, extensibles a siete si se incluyen los planes de ajuste (las reformas en el lenguaje de la UE) que lo justifiquen.

En ello está el Gobierno: el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informaba de que «el Ministerio de Economía está trabajando con la Comisión Europea para presentarle una hoja de ruta fiscal a cuatro años». Siendo claros, el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz prepara al alimón con la CE un plan de ajuste para 2025 que algunos cifran en 15.000 millones de euros. Según nuestros cálculos ese plan de ajuste supondría un recorte presupuestario de más de 20.000 millones anuales durante 4 años. Se entiende mejor así la campaña del FMI, de la UE y de los medios sobre la «insostenibilidad» del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Junto a las pensiones se trata también de desmantelar y privatizar la sanidad y la enseñanza públicas (ver páginas 4 y 9 de este número de *Información Obrera*). Difícilmente podrá el Gobierno llevar adelante estos planes sin la colaboración de los dirigentes de las grandes organizaciones sindicales.

Se entiende entonces el porqué de nuestro empeño en combatir para que la marcha republicana del 16J sea un éxito (ver página 7): luchar por la unidad para hacer fracasar los planes de ajuste, apoyar y alentar todos los elementos de ruptura con el ajuste y la guerra, desmantelar un régimen antidemocrático, la monarquía heredera de Franco, y, ¿cómo no?, una supuesta unión de Europa instigadora de guerras y recortes sociales.

Blas Ortega



Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía y Comercio y Carlos Cuerpo, ministro de Economía del Gobierno

La guerra en el centro de la campaña europea

Los anuncios de estos días de los dirigentes de los principales partidos, PP y PSOE, dan un poco el tono general de lo que representa una política sometida a los intereses del capital financiero, las instituciones europeas y el aparato franquista.

Feijóo ante un «público selecto» en el centro de Madrid, continuó en su declaración de guerra contra derechos y libertades, en este caso la amnistía. En efecto la ley votada este jueves en el Congreso, que provoca una oposición central en las instituciones franquistas, sería derogada si Feijóo gana las elecciones, por ello las pide anticipadas para julio y quiere una mayoría en las europeas para preparar el terreno.

El presidente Sánchez, por otro lado, reconoce el Estado palestino, acto simbólico, y un día antes recibe a Zelenski y le da 1.100 millones en ayuda militar, para continuar la guerra y la matanza. Decisión que corresponde a lo que los Gobiernos europeos plantean en esta campaña. En Gran Bretaña se plantea incluso recuperar el servicio militar.

La matanza continúa en Palestina y los Gobiernos europeos continúan con su política de guerra.

La tarea del momento es levantar un amplio movimiento por el fin de la guerra de Ucrania y el genocidio de Gaza. Este es el sentido de la campaña que anunciamos en la página 6.

AT

Después de las elecciones del 12-M, ¿mismas soluciones para mismos problemas?

Los datos son ya conocidos y han sido ampliamente comentados: victoria del PSC (9 diputados más), bajón espectacular de ERC (13 diputados menos), subida de JUNTS (3 más que le permiten quedar como fuerza hegemónica del independentismo) y retroceso de los Comunes. Sorprende la insistencia de prácticamente todos los periódicos y tertulias acerca del aumento del voto de la llamada «derecha y extrema derecha», a cuenta del resultado del PP (suben 12), de Vox (que mantiene la misma representación), porque si se tienen en cuenta los votos obtenidos en 2017 (referencia más razonable porque en 2021 las elecciones se realizaron en época de pandemia), los votos de ambas formaciones llegan a la mitad de los que consiguió C's. Cuestión aparte son los resultados de Alianza Catalana, candidatura que ha concitado el voto descontento del independentismo, que se ha centrado en aspectos identitarios y

en la lucha contra la inmigración que ellos llaman ilegal, siguiendo la estela racista y xenófoba de Vox. Sin olvidar la abstención, que pasa del 20,9% en 2017, al 42% actual. Un aumento más que significativo.

Pero ¿qué dicen los resultados? Al respecto, conviene señalar tres cuestiones importantes. En primer lugar, casi todo el mundo se ha apresurado a decir que el *procés* está finiquitado, confundiendo el deseo (de muchos de los que lo proclaman) con la realidad. Efectivamente, los partidos independentistas ya no tienen la mayoría parlamentaria, pero la cuestión catalana sigue vigente y no ha muerto en absoluto. Son dos cosas diferentes.

En segundo lugar, el independentismo no recupera los votos conseguidos en 2017, en los que consiguió 2.079.340 por 1.348.676 en las últimas elecciones. Una pérdida de votos y de apoyo popular que tiene que ver no solo con el hecho de que no

se percibe la independencia como algo posible de conseguir, sino también con el hecho de que la estrategia seguida por los dirigentes independentistas, basada exclusivamente en conseguir el apoyo de las instituciones europeas que supuestamente estarían interesadas en la causa catalana, ya no es susceptible de movilizar como antes porque se ha demostrado inviable y utópica.

¿Por qué la victoria del PSC?

Y en tercer lugar, la victoria del PSC, que ha conseguido ciertamente un resultado histórico al ganar por primera vez (en votos y en diputados) unas elecciones al Parlamento catalán. El candidato Illa ha basado su campaña en la necesidad de «pasar página» de lo que llama una década perdida (la década del *procés*). Una idea aplaudida desde diferentes sectores, desde la patronal Fomento del Trabajo Nacional -que guardó silencio durante los mo-



mentos álgidos del *procés*-, hasta sectores importantes de la clase obrera, que son contrarios a la idea de la independencia, aunque esto no quiere decir que no suscriban determinadas reivindicaciones democráticas. El voto al PSC ha sido más que nunca un voto que ha reunido en sí mismo todos los elementos contradictorios de la situación política. El primero de ellos, la promesa de pasar página incluyendo la amnistía, que está por ver cómo se va a aplicar. El segundo, el voto de muchos trabajadores que no suscriben el discurso de enfrentamiento y división con el resto de trabajadores y pueblos de España, pero que quieren mantener el empleo, mejorar los salarios para poder hacer frente al aumento de precios, y salvar los servicios públicos en situación crítica después de años de recortes. Es decir, resolver los problemas reales de la gente.

En el momento en que se escriben estas líneas los partidos están negociando la cuestión de la presidencia de la Generalitat. Pedro Sánchez se ha apresurado a proclamar que todos los caminos conducen a Illa como presidente, despejando las dudas que pudieran haber respecto al sacrificio de este

último, en aras de la gobernabilidad de España, como alienta una parte del independentismo. Por su parte, los de Puigdemont sugieren que todavía hay una posibilidad de que este sea investido presidente. Sin embargo, aunque todas las hipótesis son posibles, la estrategia de Junts está claramente dirigida a erosionar a ERC, y a marear la perdiz en torno a la posibilidad de una repetición electoral.

Pero el resultado de las elecciones tiene también otra lectura que es preciso señalar. Las jornadas celebradas recientemente por el Círculo de Economía en Barcelona muestran cómo van a utilizar los sectores económicos la victoria del PSC: se han apresurado a pedir a Sánchez «más coraje» para buscar un acuerdo con el PP. El rey, Felipe VI, ha recalcado igualmente que «el diálogo y la colaboración son claves para afrontar los retos que se avecinan». Para todos ellos, «pasar página» significa restablecer el consenso entre el PSOE y el PP. Más allá de saber si Illa será investido o no presidente, la incógnita también es saber si Pedro Sánchez y el PSC sucumbirán a las presiones o no.

J.A. Pozo



La lucha contra la «desindustrialización» (primera parte)

Sería erróneo considerar que la galopante desindustrialización que sufre nuestro país es solo la consecuencia de la política nacional de los diferentes Gobiernos de la Monarquía en España. Debemos recordar que en el último periodo del franquismo la industria llegó a representar casi el 30% del producto interior bruto (PIB). Hoy estamos en un justo 16%. Lo que entonces se llamaba el Mercado Común Europeo (MCE), hoy Unión Europea, planteó como condición a los diferentes Gobiernos, si querían entrar en el MCE, llevar a cabo una profunda reestructuración industrial, iniciada por el Gobierno Adolfo Suárez y sobre todo aplicada por el Gobierno de Felipe González y su ministro Carlos Solchaga. Este individuo llegó a decir que en España no hacía falta ninguna política industrial. En efecto, se operó el cierre de minas, de la gran siderurgia, del aluminio, de los astilleros -excepto los militares-, y la mayoría del textil, entre otras industrias. El objetivo era convertir España en un país de servicios. Servicios que hoy representan el 75% del PIB, del cual el turismo supone el 13% directamente y el 20% inducido. Y creciendo. Paralelamente la agricultura también disminuyó al 3%, con la destrucción de la mayoría de la agricultura tradicional y su transformación en agricultura intensiva de exportación, según las necesidades de la Unión Europea.

Después de la pandemia

El discurso oficial ha cambiado. Todos los medios de comunicación y portavoces de instituciones, patronal y afines hablan de la necesidad de la reindustrialización. El desastre provocado -que se manifestó en la incapacidad de producir bienes sencillos como mascarillas y batas de protección- afectó, durante la pandemia, a la propia supervivencia de millones de ciudadanos, sin mascarillas, sin material médico elemental, sin una industria que pudiera ponerse al servicio de la sanidad pública y universal que consta, legalmente, como exis-

tente. Esta penuria aprovechada por una política destructora que solo obedecía a los intereses del capital financiero es el origen de todos los negocios especulativos que se realizaron y se realizan sobre esta base.

Sin embargo, todos hablan de reindustrialización, mientras siguen los anuncios del cierre de empresas o reducción de personal, en el automóvil con el señuelo del coche eléctrico (por otro lado copado por la producción china a mitad de precio), o el cierre anunciado de Alcoa, última empresa productora de aluminio, por su deslocalización.

Por su parte los trabajadores exigen a sus sindicatos que se pongan a la cabeza de la lucha en defensa de la industria y los puestos de trabajo. Lucha que difícilmente puede tener éxito empresa por empresa.

Es por ello que debemos abordar la cuestión, no solo en su lucha concreta, sino en su globalidad.

De entrada, estamos en un mercado mundial capitalista, que se está reduciendo o contrayendo. Y este mercado mundial está dominado por las multinacionales, en su mayoría norteamericanas, que producen deslocalizando en función de los costes. En estos momentos el taller del mundo está en Asia, en China, India y demás países. El PIB de los Estados Unidos representa hoy el 25% mundial, el de China y en menor medida, la India, otro 25%. En 30 años han pasado del 4% al actual 25%. El de los países de la Unión Europea ha disminuido a la mitad en 30 años, representando hoy el 15%, y sigue bajando.

En la Unión Europea la desindustrialización ha sido parecida a España, sobre todo en Francia e Italia. La industria solo se mantiene en Alemania (que controla la mayoría de países del Este), Suiza y los países nórdicos.

Sin embargo, aprovechando la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha impuesto a Alemania la energía cara en sustitución de la energía barata de Rusia. Esta es la anarquía capitalista,

consumir energía cara cuando se tiene a mano la más barata. Esto ha representado un golpe brutal para la economía alemana. La industria alemana calcula que ha perdido en 2023 más de 200.000 millones de euros.

Y la carrera armamentística impuesta por la OTAN (o sea EE.UU.) hace no solo sustituir la mantequilla por cañones, sino hacer más dependientes a los países europeos de los Estados Unidos, pues la mayoría de nuevos armamentos proviene de ellos.

La guerra comercial es otra de las consecuencias de la política de guerra impuesta por el imperialismo, acompañada, hay que decirlo, por la oligarquía del Kremlin que aprovecha la guerra de Ucrania para revitalizar su vieja industria de armamentos e intentar controlar el mercado de cereales. Rusia controla hoy casi la cuarta parte del comercio de cereales.

La Unión Europea: última oportunidad

En el mes de abril se hicieron públicos los informes que las instituciones de la Unión Europea, particularmente el Consejo Europeo, encargaron sobre la competitividad y el mercado único. Estos informes fueron encomendados a Mario Dragui, expresidente del Banco Central Europeo, y a Enrico Letta, ex primer ministro italiano. Sus resultados eran muy preocupantes. Partían del estancamiento de la Unión Europea y la falta de competitividad en el mercado mundial ante las multinacionales norteamericanas y China. En particular, Letta dice: «La dispersión actual impide a las empresas crecer y explotar el potencial del mercado único (en realidad muy fragmentado), desarrollar una política industrial y la unión del mercado de capitales para impedir que los ahorros de los europeos acaben derivados hacia los USA y en algunos casos se hagan servir para financiar la compra de empresas europeas». Es decir, que los países europeos están financiando su propia desindustrialización. La conclusión de Letta es que hay que operar un giro total pues «Europa está ante la



última oportunidad». Dragui dice: «Sin acciones políticas estratégicas coordinadas a escala europea, algunas industrias de uso intensivo de energía tendrán que salir de Europa o cerrar». Una política industrial, sigue, sería «la unión de los mercados europeos de capitales» que «permita a las grandes empresas europeas crecer y poder competir con las de los USA o China».

Esto es un sueño de verano. La unión de capitales sería posible si hubiera una burguesía europea única, un Estado, un real banco central autónomo de la Reserva Federal estadounidense. La realidad es lo contrario, la sumisión a los USA multiplica los conflictos entre las diferentes burguesías europeas. Se hacen la competencia, recurren a sistemas fiscales diferentes atrayendo empresas para que deslocalicen, jugando con los bajos salarios, impulsando de hecho la destrucción de las condiciones sociales conquistadas por la clase obrera.

La burguesía no puede unificar Europa. De nuevo se comprueba que la unión de Europa será obra de la revolución proletaria o no será. La Revolución de Octubre en 1917 abrió la perspectiva de los Estados Unidos

Socialistas de Europa, pero la derrota de Alemania impidió el triunfo de la revolución en Europa y el desarrollo de la propia URSS, que necesitaba de la técnica más avanzada alemana (ver Lenin). La contrarrevolución estalinista facilitada por la derrota de la revolución proletaria en Alemania cerró momentáneamente esta vía.

Y sin embargo, más que nunca, el futuro de los países y pueblos europeos está unido, y lo que ofrece la burguesía, los diferentes Gobiernos, es guerra, destrucción de las conquistas sociales y de la democracia. La guerra actual aumenta el sometimiento a los intereses norteamericanos, y más aún cuando Biden, con la Ley de Reducción de la Inflación, destina una suma de más de 200.000 millones para ayudar a que las empresas norteamericanas exporten y que las empresas europeas deslocalicen hacia los Estados Unidos.

Es el acta de bancarrota de la Unión Europea: ni unión, ni europea. Incluso excepciones como el Airbus son eso, excepciones.

Andreu Camps

(Publicamos este artículo en dos partes. Podéis encontrar el artículo entero en nuestra web)

La comisión en defensa de la industria recibida en el Congreso de los Diputados

El pasado martes 28 de mayo una delegación de la comisión en defensa de la industria fue recibida por varios portavoces parlamentarios convocados por la presidenta de esta comisión, Inés Granollers.

Por parte de la comisión asistieron sindicalistas del sector del automóvil (Stellantis), de John Deere y de Schneider.

Asistieron a la reunión por los grupos parlamentarios el BNG, ERC, PSOE y PP. Los miembros de la comisión expusieron los procesos de desindustrialización que hay y pidieron una implicación del Estado en garantizar la energía barata, la intervención en sectores estratégicos para impedir más deslocalizaciones.

Se habló del sector de automóvil y del peligro que corren los cientos de miles de puestos de trabajo, de Alcoa y el sector del automóvil y de Acerinox, empresa que lleva más de 110 días de huelga. En próximos días habrá un informe de esta reunión.

Corresponsal



Más de 110 días de huelga en Acerinox

Acerinox fue fundada en la localidad de Palmones en 1970. Fue la primera fábrica integral de acero inoxidable del mundo. Luego se expandió a nivel internacional, fundando fábricas en Estados Unidos, Sudáfrica y Malasia.

Tras 50 años de próspero negocio, consiguió récord de beneficios en el 2022 con 556 millones de euros.

La empresa ha tenido un impacto económico muy importante en la comarca del Campo de Gibraltar, con más de 1.800 puestos de trabajo directos, y más de 2.000 indirectos. Acerinox lidera el ranking de las 5 mayores fábricas exportadoras de la comunidad autónoma de Andalucía, siendo una parte importante del PIB de toda Andalucía. Sin embargo y pese a lo expuesto, la empresa llevó a cabo un ERE en 2019, afectando a 215 trabajadores; un ERTE en 2020, por culpa de la pandemia (tras haber sido la fábrica declarada esencial y sus trabajadores obligados a trabajar durante toda ella, con el riesgo que eso conllevaba) y un ERTE en 2022, el que la empresa preguntó a 2023.

Posteriormente, la empresa planteó en la negociación del nuevo convenio un cambio productivo radical, que se centraba en la merma de los derechos laborales de los trabajadores y la eliminación de cualquier posibilidad de conciliación familiar por parte de los integrantes de la plantilla de Acerinox Europa.



Tras perder poder adquisitivo en años anteriores, ahora los trabajadores piden una revisión salarial de un 3,5% en 2023, 3,5% para el 2024, 4,5% para el 2025 y 4,5% para el 2026, así como la cláusula de garantía salarial ligada al IPC. Tratan de recuperar el poder adquisitivo perdido estos años y también se pide la incorporación en la nómina de los trabajadores del plus de toxicidad.

En cambio, la empresa no solo se negó a hablar de las pretensiones, sino que planteó un nuevo modelo productivo consistente en una amalgama de medidas, entrelazadas tan fuertemente entre sí que resulta casi imposible separar unas de las otras, haciendo que la negociación del bloque sea una tarea titánica.

Este conjunto de medidas se puede subdividir claramente en dos puntos: la disponibilidad de los trabajadores y la flexibilidad

horaria, consistente en una distribución que convierta en irregular la jornada laboral.

La represión en el centro

La empresa se negó a reconocer al comité de huelga, aunque lo ha tenido que terminar reconociendo. Y han querido socavar el derecho a la huelga a los trabajadores en repetidas ocasiones, dudando de la legitimidad de esta, no moviéndose de su postura, y desembocando en más denuncias penales sobre este comité de huelga por presuntos hechos no contrastados y faltando a la verdad de la realidad acontecida.

El comité de empresa está compuesto por los sindicatos ATA, mayoritario, UGT, CCOO y USO.

Ahora se están plantando llevar una PNL (Proposición no de Ley) al Congreso de los Diputados y están organizando una caja de resistencia.

Jesús Béjar

¡Madrid sigue en pie por la sanidad pública!

La ciudadanía organizada en el espacio «Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid» lo ha vuelto a hacer, ha movilizado a decenas de miles bajo el lema ¡Madrid sigue en pie por la sanidad pública!

Ocurrió el 12 de noviembre de 2022 y el 13 de febrero de 2023; ha vuelto a suceder el 19 de mayo de 2024, que miles de personas se han echado a las calles para reivindicar su sistema público de sanidad en Madrid. Desde fuera, puede pensarse que una vez «sonó la flauta», pero dos veces ya no es casual y tres, mucho menos. Estas movilizaciones, las mayores vistas en Madrid desde 2003, cuando los partidos de izquierda y las dos grandes confederaciones sindicales organizaron la movilización para rechazar la brutal guerra de invasión de Irak, urdida por los USA con la complicidad de Gran Bretaña, en la que Aznar nos implicó.

Esta capacidad de movilización pone en evidencia a quienes argumentan frívolamente que «la gente no quiere luchar», y expresiones por el estilo. Pone en evidencia la dimisión de la izquierda en su forma de hacer y relacionarse con la mayoría social, fomentando una distancia cada vez mayor entre las organizaciones de la clase y esa mayoría: trabajadores, pensionistas, desempleados, autónomos y estudiantes.

Este éxito no tiene misterios, solo mucho trabajo y la firme determinación de personas convencidas de que defender lo público es cosa de todas y todos. Sin financiación ajena a los propios vecinos, sin aparatos, sin nada más que tiempo y dedicación militante. El asociacionismo vecinal independiente está fuerte y ha demostrado nuevamente que la política sana también existe; la de quienes viven de

su trabajo, los que pagan sus impuestos, los ajenos a corrupciones, intrigas y advenedizos.

La sanidad está siendo carcomida por la privatización y por los recortes presupuestarios. No son políticas nuevas, llevamos muchos años asistiendo a ajustes en presupuestos con la excusa de las crisis: 2008, inmobiliaria y financiera; 2020, pandemia COVID; 2022, guerra en Ucrania. Todo vale para justificar que hay que cumplir con el artículo 135.3 de la Constitución, el que dice: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta». Y cuando dice absoluta, es por encima de cualquier otra necesidad de gasto social. Las deudas hay que pagarlas, excepto si eres la Banca y el Estado te da más de 100.000 millones de euros y no te los reclama.

Detraen dinero público de la sanidad

Ante nuestras narices, detraen dinero público de la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia y no se cortan en incrementar los gastos militares. Recortan dinero para curar y educar, para destinarlo a matar.

La privatización en la sanidad está legalizada desde 1986, cuando la Ley 14/86, Ley General de Sanidad, en sus artículos 66, 67 y 90, estableció los convenios singulares y conciertos con hospitales privados. Fue la Ley 15/97 la que abrió de par en par puertas y ventanas a la entrada de las empresas privadas en la gestión de la sanidad pública, sin ninguna restricción, tal como establece el artículo único de



esta Ley del primer Gobierno del PP de Aznar: «a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho». ¿Acaso lo coherente no es exigir la derogación de esta legislación? Además, no es casualidad que en torno a la gestión privada de los servicios públicos florezca con frecuencia la pestilente corrupción.

La manifestación del 19 de mayo ha puesto el foco en los problemas de la sanidad en Madrid, que no son muy diferentes de los que ocurren en otras comunidades autónomas, pues la legislación antes citada habilita la privatización en todo el Estado.

Dicho lo anterior, la Comunidad de Madrid tiene algunos elementos que la hacen estar en la *pole position* de la destrucción de la sanidad pública: está a la cola del presupuesto por persona destinado a la sanidad: 1.468,38 €/habitante en Madrid, frente a los 1.906,29 €/habitante en promedio en el resto de comunidades autónomas.

De aquí se deriva que médicos y enfermeros tengan que migrar a otras comunidades e incluso a otros países. De hecho, un porcentaje del 40% de los servicios de urgencias extrahospitalarias no tienen facultativo y en la atención primaria no es difícil encontrar centros de salud sin pediatra.

Los recortes económicos tienen como consecuencia que los hospitales madrileños tengan cada vez menos camas, tanto en planta como en urgencias: en las tres últimas décadas las camas de hospital se han reducido más de un 11% y la ratio de camas en urgencias está un 33% por debajo de la media en la UE: 3 camas por cada 1.000 habitantes en Madrid; 4,5 el promedio en los países UE.

Sigamos luchando, continuemos organizando a la mayoría que quiere resistir.

Roberto Tornamira Sánchez, miembro del Espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid



La ley que propone Mónica García ¿pondrá fin a la privatización?

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha iniciado los trámites de una «Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud». Una ley que algunos presentan como la derogación de la Ley 15/97 y como una barrera frente a la privatización de la sanidad. ¿Cuál es la realidad?

La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) abre varias posibilidades de privatización de la sanidad: los conciertos (art 90) «para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas [las administraciones]», para los que da prioridad a los centros cuya titularidad corresponda a «entidades que tengan carácter no lucrativo». La segunda posibilidad de privatización de la sanidad pública está establecida en los artículos 66 y 67, que permiten la vinculación al Sistema Nacional de Salud de hospitales generales del sector privado, mediante la figura de los convenios singulares. Es la figura que permite que formen parte de la sanidad pública andaluza los hospitales de la empresa Pascual y algunos hospitales de la Orden de San Juan de Dios. La ley que propone Mónica García no toca ninguna de estas dos figuras.

La propuesta modifica –que no deroga– la Ley 15/97, «sobre habilitación de nuevas for-

mas de gestión del Sistema Nacional de Salud», que estableció la posibilidad de que la gestión de los centros sanitarios públicos pudiera hacerse «directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho». La Ley regula, igualmente, los consorcios sanitarios, figura que permite que el Hospital Público del Aljarafe, en Sevilla, que atiende a una población de más de 300.000 habitantes, sea gestionado por la Orden de San Juan de Dios.

No se conoce el articulado, ni el rango en el ordenamiento jurídico, de la propuesta de ley del Ministerio de Sanidad, pero sí se ha abierto una consulta pública sobre esa ley. En la apertura de esa consulta podemos leer que el objetivo de esa ley no es eliminar la posibilidad de gestión privada de la sanidad pública, sino que se busca la «limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro». Limitar no es eliminar.

También se propone «mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad» (que, por tanto, se mantienen), así

como facilitar «la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes». Facilitar la reversión es bueno, pero no es revertir. Los gobiernos autonómicos podrán mantener esos modelos de gestión privada.

Por tanto, salvo que sea modificada, la ley de Mónica García no es la derogación de la Ley 15/97 que ella defendía antes de ser ministra.

Más de 1.000 activistas de las Mareas Blancas y Plataformas por la Sanidad Pública, de asociaciones vecinales y de sindicatos han firmado ya una carta a Mónica García en la que se demanda la derogación de la Ley 15/97, de los artículos 66, 67 y 90 de la LGS, de las disposiciones que permiten la intromisión de las mutuas –entidades patronales– en las bajas laborales por enfermedad común, y un presupuesto extraordinario para la sanidad que permita recuperar a la sanidad pública de los recortes sufridos en los últimos años. Animamos a continuar la recogida de firmas y ya hemos pedido una entrevista al Ministerio para su entrega.

Roberto Tornamira y Luis González

UGT de Euskadi exige internalizar el servicio de ambulancias

La sección sindical de UGT en las ambulancias externalizadas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) exige la internalización del servicio tras las nuevas sanciones impuestas a la actual adjudicataria, La Pau, que gestiona los servicios de Bizkaia y Álava. Los responsables del sindicato recuerdan en su comunicado que tras haber denunciado y logrado, el pasado 1 de mayo, que se paralice cautelarmente la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte sanitario programado o no urgente a La Pau, el sindicato ha sufrido numerosas presiones. Desde entonces, la Inspección de Trabajo ha resuelto una denuncia interpuesta por UGT, sancionando a La Pau con dos nuevas faltas graves [...] y se han abierto otras dos actas de infracción por el retraso en

el pago de las nóminas a la plantilla.

[...] Ante esta situación, UGT exige al Gobierno vasco que tome cartas en el asunto e internalice un servicio tan esencial como el de las ambulancias, quitando de en medio a estas empresas que se lucran a costa de pacientes y personas trabajadoras.

[...] En este sentido, UGT hace un llamamiento a la movilización de las personas trabajadoras del sector y a la ciudadanía en general para exigir al Gobierno vasco la internalización del servicio de ambulancias.

Fuente: <https://ugteuskadi.net/exigimos-al-gobierno-vasco-la-internalizacion-del-servicio-de-ambulancias-tras-las-nuevas-sanciones-a-la-adjudicataria-la-pau/>

Corresponsal (13/05/2014)



¡Victoria de los estudiantes, un impulso para continuar la lucha!

Después de 18 días de protestas en forma de acampada en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, los estudiantes hemos conseguido una victoria importante. La Universidad de Barcelona rompe relaciones con la Universidad de Tel-Aviv e insta a los Gobiernos tanto de España como de la Generalitat a romper toda relación armamentística con el Estado de Israel.

Estos 18 días de movilización han dejado una cosa clara: con organización y lucha somos capaces de cambiar las cosas. Aunque vuelquen todos los esfuerzos en desmovilizar y desmoralizar a toda una generación de jóvenes, se ha demostrado que los jóvenes queremos transformar la realidad que nos condena. Porque si bien es una victoria, solo debe ser el principio para ge-

neralizar la indignación de la juventud y la clase trabajadora contra el genocidio y los Gobiernos cómplices. Desde la acampada de Barcelona se ha dejado claro que la lucha continúa, y que todavía hay que seguir trabajando para masificar la movilización en solidaridad con el pueblo palestino, que no puede ser de otra manera que exigiendo la ruptura de relaciones al Gobierno.

La masificación del movimiento solo puede darse con la implicación de la clase trabajadora, movilizadora por sus organizaciones sindicales, que tienen toda la responsabilidad de responder y no quedarse de brazos cruzados. En esa implicación de la clase trabajadora es donde tenemos que centrar los esfuerzos los estudiantes que salimos de esta acampada histórica. La continuación de la lucha pasa porque todos los compañeros que hemos participado en la acampada impulsemos comités de solidaridad con Palestina en nuestras facultades, organizando asambleas

para implicar a más compañeros. Porque los problemas de la juventud están más que nunca implicados en la lucha del pueblo palestino. Porque los que condenan a la juventud obrera de este país miran para otro lado delante del genocidio. Los discursos y narrativas no engañan a nadie, los hechos y las políticas es lo que importa. No puede existir un Estado palestino sobre las

bases de asesinados bajo los escombros.

Los estudiantes seguiremos organizando asambleas, yendo facultad por facultad para que de cara al curso que viene la ola de movilizaciones sea más grande todavía. Porque los estudiantes internacionalmente seguiremos respondiendo ante la barbarie contra el pueblo palestino. Esto no queda aquí, la lucha continúa hasta que Palestina sea libre desde el río hasta el mar.

Victor Iniesta



La acampada de Madrid se mantiene

En el momento de máxima concentración de exámenes, la participación en la acampada de la Complutense de Madrid ha disminuido, pero se mantiene, confiando en recuperar fuerzas cuando pase este momento.



La acampada en la Politécnica de Valencia también resiste

La Universidad Politécnica de Valencia baraja reconocer explícitamente «la masacre humanitaria en Gaza a manos de Israel», suspender temporalmente el intercambio académico en el programa Erasmus+, iniciar un programa de 50.000 euros en ayudas a estudiantes palestinos o «apoyar a las universidades palestinas y su personal» para que la protesta propalestina se disuelva finalmente. Así reza la propuesta que el rectorado mandó ayer al estudiantado de la Acampada por Palestina, tras varias reuniones, y que no ha servido para levantar la protesta que lleva 12 días ocupando los jardines de la UPV en Valencia. Los estudiantes dicen que no se irán hasta que haya medidas «más valientes».



Sobre el texto «La ecología y la crisis climática»

Extractos sobre el texto «La ecología y la crisis climática» (Tomo II)

La transición ecológica tampoco aporta ninguna solución a los problemas económicos que socavan el régimen de propiedad privada de los medios de producción.

El banco Natixis explica que la rentabilidad financiera de la producción de electricidad verde es modesta y la de la renovación térmica de los edificios es baja. La descarbonización de la industria tiene una rentabilidad nula, no hay retorno de dinero para accionistas e inversores: «La descarbonización de la industria requiere inversiones que cambien la tecnología de producción, por ejemplo, de combustibles fósiles a hidrógeno, sin aumentar la producción ni los beneficios».

Aquí está el problema

«La descarbonización de la industria tiene cero rentabilidad». Entonces, ¿por qué están haciendo tanto en la transición ecológica? Porque permite financiar la inversión privada mediante el saqueo de los fondos públicos. El mejor ejemplo es la IRA en Estados Unidos y el Pacto Verde Europeo, que por sí solos movilizarán 1 billón de dólares de dinero público para financiar a las empresas. Así que esto es lo que dicen: «Vas a tener que invertir más sin tener más ingresos. Por lo tanto, será necesario reducir el consumo (...) Esto se puede hacer animando a la gente a ahorrar, bajando los salarios, aumentando la carga fiscal».

En Francia, Medef encargó un estudio a Rexecode. Esto es lo que dice: «A cambio de un mayor esfuerzo inversor y una ventaja ecológica, tendre-

mos que aceptar un menor consumo. Además, sean cuales sean, estas medidas tendrán un impacto duradero al alza en la inflación. Estos son los retos económicos y los costes reales de la descarbonización».

Veamos la cuestión de la energía nuclear

Actualmente presenta dos problemas: la seguridad (véase los graves accidentes de Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima) y la cuestión de los residuos. En efecto, los residuos altamente radiactivos que producen las centrales nucleares han de ser almacenados durante miles de años. Sin embargo, había desarrollos de tecnología que permitían el reprocesamiento de esos residuos. En 2018, Francia abandonó su proyecto de construir Astrid, un reactor nuclear de cuarta generación, a corto o medio plazo. Después de que el proyecto fuera detenido, el director ejecutivo de la CEA, François Jacq, explicó que había decidido «no construir el prototipo de reactor» que costaría «varios miles de millones de euros». Esto debería haber permitido el cierre del ciclo del combustible nuclear. Astrid se presentó como un «isogenerador», es decir, un reactor que habría regenerado el material fisible utilizado para producir electricidad.

Pero el reciclaje infinito del combustible nuclear ya no es una prioridad

por razones económicas. El precio del uranio es relativamente bajo. Estados Unidos también ha abandonado sus proyectos de regenerar el material radiactivo por medio de reactores rápidos. Otra vía posible es la que propuso Gérard Mourou, premio Nobel de Física 2018. El trabajo de este científico, junto a su colega el profesor Toshiki Tajima, plantea un método para eliminar los residuos radiactivos mediante un láser potente. Nadie apoyó ese proyecto, por su falta de rentabilidad inmediata. Mientras subsista el régimen de propiedad privada de los medios de producción, basado en la búsqueda del máximo beneficio, este se opone a proyectos que supongan invertir fondos durante años, mientras se puede producir electricidad con uranio barato. Recordemos que el uranio es barato porque en Níger, principal productor, se extrae por personal con bajos salarios y muy escasas condiciones de seguridad.

El régimen de propiedad privada de los medios de producción

Para este sistema de producción la «transición ecológica» significa, en primer lugar, un empobrecimiento generalizado de la población y un saqueo masivo de los recursos del Estado en detrimento de los servicios públicos, y en particular de los servicios de agua y bosques, puentes y carreteras, costas, ríos y mares, protección civil, vivienda, clima, educación, hospitales. El dinero privado existe en abundancia. Pero como su

inversión no es rentable, tiene que saquear el dinero público.

Además, al amparo de la descarbonización se ha procedido al cierre de minas y centrales eléctricas que ha empobrecido a regiones enteras. En todo caso, la producción de CO₂ tiene también un carácter de clase. Un estudio de Oxfam, publicado en enero de 2024, explica que el 1% más rico del mundo no solo acumula nada menos que el 63% de la riqueza que se ha producido en el mundo desde 2020, sino que «también contamina en una proporción similar: expulsan a la atmósfera tantas emisiones de gases de efecto invernadero como los dos tercios más pobres de la humanidad».

Ese 1% —77 millones de personas— generó en 2019 el 16% del total de las emisiones de carbono expulsadas a la atmósfera en todo el planeta, una cifra mayor que la totalidad de las emisiones generadas por desplazamientos en coche y el transporte por carretera. Las emisiones anuales a nivel global del 1% más rico de la población mundial anulan el ahorro de emisiones de carbono generado por casi un millón de turbinas eólicas.

Oxfam añade que «una investigación que analiza las emisiones derivadas de los hábitos de consumo (las llamadas «emisiones por el estilo de vida») de 20 millonarios (18 de ellos hombres y todos blancos) ha revelado que cada uno de ellos genera, en promedio, más de 8.000 toneladas de CO₂ en un solo año». Este año, al terminar el partido de la Super Bowl, en Las Vegas, hasta 525 jets privados salieron del aeropuerto de esa ciudad. Sin embargo, nos bombardean con mensajes de responsabilidad ecológica dirigidos a la población trabajadora.

Población que ha sido expulsada de las grandes ciudades por la especulación con la vivienda, y que ha tenido que desplazarse a poblaciones dormitorio, desde las que muchas veces ha de desplazarse a trabajar en coche. Ahora le machacan con la subida de los combustibles «para salvar el planeta».

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a la Comisión Europea para exponer su proyecto de gasto de los fondos europeos (el nuevo maná que según nos dicen va a salvar a la economía) se apoya, una y otra vez, en dos elementos: transición ecológica y transformación digital. La transición ecológica justifica una propuesta de la subida de los impuestos al gasóleo. El texto del Gobierno subraya que actualmente «disfruta de una fiscalidad ventajosa con respecto a la gasolina», a pesar de que no contamina menos.

Por ello, se propone internalizar sus costes ambientales y revisar las bonificaciones existentes en algunos carburantes. Hablar de bonificaciones en un producto que ya sufre un impuesto de 30,7 céntimos por litro, más un 21% de IVA (es decir, que más de la mitad de su precio son impuestos) es intentar engañar al pueblo que los paga. Recordemos a los que pretenden que solucionar la crisis climática exige ir a trabajar en bicicleta, pasar frío o calor en casa y en el trabajo, dejar de comer carne y reducir en general el consumo, que el 70% de las emisiones industriales de carbono desde 1998 tienen su origen en tan solo 100 empresas productoras de petróleo, carbón y gas.

Jóvenes por la ORJ (Organización Revolucionaria Juvenil)

Primeros firmantes del Llamamiento contra la guerra publicado a iniciativa de la reunión del Comité de Enlace Europeo reunido en París el 4 de mayo de este año. Los 144 firmantes pertenecen a 19 países. Podéis encontrar el llamamiento en nuestra web: <http://informacionobrero.org/llamamiento-europeo-contra-la-guerra/>

Alemania: Michael Altmann, Ver.di Hesse, sanidad servicios sociales, enseñanza y ciencias; Carla Boulboullé, periódico SOPODE (Política Socialdemócrata); Britta Brandau, miembro Ver.di, secretaria adjunta Die Linke por Hesse; Reiner Braun, Buró de la Internacional por la Paz (IPB); Isabelle Cassel, PeaceLab, miembro Was Tun; Henning Frey, Was Tun Cologne, sindicato docente GEW; Harri Grünberg, coordinador Was Tun; Dr. Khaled Hamad, secretario de la comunidad palestina de Alemania; Susanne Hille, responsable sindical; Andrej Hunko, diputado en el Bundestag, Alianza Sarah Wagenknecht; Kristine Karch, copresidente red internacional «No to war - No to NATO»; Sean Conner, director ejecutivo del Buró de la Internacional por la Paz (IPB); Jutta Kausch, promotora coordinación berlina por la Paz; Gotthard Krupp, dirección Ver.di por Berlín y Brandeburgo, periódico SOPODE (Política Socialdemócrata); Mario Kunze, sector de Sanidad, miembro Ver.di; Andreas Kutsche, Ver.di, concejal, Alianza Sarha Wagenknecht; Dieter Lachenmayer, coordinador Bade-Wurtemberg Red por la Paz; Barbara Madj Amin, promotora coordinación berlina por la Paz; Thilo Nicklas, secretario adjunto IG Bau Colonia y Bonn; Dr. Christof Ostheimer, militante por la Paz en Ver.di Norte; Kathrin Otte, círculo de coordinación de Was Tun; Marcus Steiger, periodista; Josephine Thyrét, responsable sindical Ver.di en la sanidad, Alianza Sarha Wagenknecht; Laura v. Wimmersperg, promotora coordinación berlina por la Paz. **Austria:** Axel Magnus, secretario del comité de empresa, Grupo Socialdemócratas y Sindicalistas contra la Política de Estado de Emergencia; Thomas Kopalek, Grupo Socialdemócratas y Sindicalistas contra la Política de Estado de Emergencia; Stefan Grasgruber-Kerl, secretario de la sección I del SPÖ Josefstadt; Werner Drizhal, miembro del SPÖ y sindicalista; Günther Mitterecker, miembro del SPÖ de la sección local de Tullnerbach; Franz Koskarti, presidente de la fracción de sindicalistas socialdemócratas de Favoriten (Viena); Andreas Auzinger, concejal, miembro del Partido Comunista Austriaco (KPÖ). **Bélgica:** Ludo de Brabander, responsable Vrede (Movimiento por la Paz); profesor De Cautern, filósofo, Universidad Católica; Nordine Saïd, militante por la descolonización, miembro de Bruxelles Panthères y del Movimiento Ciudadano Palestina; Pierre Galland, senador honorario; Pierre Debbaut, director honorario del Ateneo Real de Neufchâteau; Emmanuel Chidozie, doctorando-investigador en la Universidad Católica de Lovaina; Joëlle Dubois, miembro del Movimiento Cuáquero, Bruselas; Ria Verjaaw, Movimiento por la Paz de Lovaina; Luk Vervaeet, antiguo profesor en el sector penitenciario; Willems Martin, organizador nacional de trabajadores autónomos en las Confederaciones de Sindicatos Cristianos; Georges Berghezán, Comité de Vigilancia de la OTAN (CSO); Claire Delstanche, DiEM25. **Chipre:** Androula Giourov, periodista, exdirector del diario Haravgi y exdirigente del partido AKEL; Andros Kyprianou, diputado, exdirigente del partido AKEL. **Dinamarca:** Magnus Carlsen, estudiante, socialista internacionalista; Steffen Fog Larsen, docente, socialista internacionalista; Jesper Yssing, aprendiz carpintero; Frederik Vinther, estudiante; Rasmus Nygaard, asistente social; Anton Schou, socialista internacionalista. **España:** Pablo García Cano, sindicalista, comité de empresa de John Deere Ibérica; Vicent Garcès, militante PSOE; Luis González, miembro del Consejo Confederal CCOO; Jordi Salvador, diputado por Tarragona en el Congreso; Marisa Saavedra, exdiputada Podemos por Castilla en el Congreso; Encarna López, organizadora de la Marcha Republicana en Madrid el 16 de junio; María Pozuelo Castro, responsable política internacional Podemos Cataluña; Conchi Abellán, Coordinadora Podemos Cataluña. **Francia:** Ahmed Beral, sindicalista RATP; Isabelle Dartagnan (LFI); Philippe Juraver, corresponsable sector social LFI; Pascal Sammouh, sindicalista; François Livartovsky, responsable sindical; Frédéric Bochar, sindicalista; Emily Chazette, militante LFI; Yessa Belkhdja, militante por la descolonización, miembro del colectivo de defensa de los jóvenes de Mantois; Jérôme Legavre, militante POI, diputado LFI; Jean-François Coulomme, diputado LFI; Stéphane Jouteux, miembro del Comité Internacional de Enlace e Intercambio (CILE); Adrien Duquesnoy, POI. **Finlandia:** Women for Peace; Women against Nuclear Power. **Grecia:** Panayiotis Xoplidis, militante NAR (Corriente Nueva Izquierda); Pavlos Antonopoulos, militante NAR; Litsa Frydas, militante NAR; Costas Bouyioukos, militante NAR; Dimitris Konstantakopoulos, periodista y editor Defend Democracy, antiguo miembro de Syriza; Marios Kritikos, sindicalista, exdirigente de Adepy (confederación griega de servicios públicos); Giogios Lieros, escritor; Petros Tsioumanis, presidente del sindicato PASYP Germanos; Themistoklis Tzimas, abogado, profesor Universidad de Atenas. **Italia:** Comité Autónomo de Trabajadores Portuarios (CALP) de Génova; José Nivoi, responsable du CALP; Potere al Popolo; Giuliano Granato, portavoz Potere al Popolo; Marta Collot, portavoz Potere al Popolo. **Noruega:** Marielle Leraand, Iniciativa Paz y Justicia; John Y Jones, Iniciativa Paz y Justicia. **Polonia:** Agnieszka Wolk-Laniewska, periodista, cronista en el diario NIE – izquierda; Beata Machul-Telus, PhD, politóloga y pedagoga, presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Sociedad Pro Humanum; Maciej Wisniowski, PhD, periodista, strajk.eu. **Portugal:** Mario Tomé, militar de abril; Carmelinda Pereira, miembro de la Asamblea Constituyente en 1975-76; Carlos Marques, candidato a la presidencia de la República en 1991 por una coalición de izquierda; Antonio Aires Rodrigues, miembro de la Asamblea Constituyente en 1975-76; Sílvia Timóteo, miembro del comité ejecutivo del consejo de administración SPGL; Rafael Henriques, dirigente del Sindicato de Médicos, zona centro, Bloque de Izquierda; Ana Cortes, Bloque de Izquierda; José Casimiro, Bloque de Izquierda. **Reino Unido:** Haim Bresheeth, Red Judía por Palestina (Jewish Network for Palestine), y Alianza Convivencia; David Cannon, presidente de la Red Judía por Palestina; Profesor Les Levidow, Open University de Londres; Centro da ajuda y asistencia a los musulmanes de Gran Bretaña, Londres (Muslim Community Helpline); Sumar Shau; Joanna Nowicki, investigadora y activista; Margaret Owen O.B.E., abogada internacionales de derechos humanos, miembro de la Red Judía por Palestina; Roshan Pedder; Asociación de amigos de Palestina de Lewisham, Londres; Dra. Margaret Chirgwin, NHS (Servicio Público de Salud); Jane de Rennes, profesor de universidad, científico; Dr. Mujahid Islam, miembro de la coalición «Stop the War UK», Cambridge; Taj Zareen, secretario de la coalición «Stop The War»; John Garrett, profesor asociado, Warwickshire; Frances Kelly, Manchester. **Rumanía:** Constantin Ozon-Ianc; Mugurel Popescu, Universidad, presidente del sindicato Solidaridad; Eusebiu-Rosini Ionita, vicepresidente del sindicato Radiatia; Marian Tudor, exconcejal; Rares Constantinescu, militante joven, Grupo Acción Socialista. **Serbia:** Zoran Pavlovic, expresidente del sindicato de carteros; Vahida Ramujkic, artista, miembro y dirigente de la Asociación de Bellas Artes de Serbia; Nebojsa Milikic, trabajador de la cultura, productor, investigados y activista; Tara Komanovic, estudiante, activista; Nebojsa Komanovic, trabajador, activista; Ratibor Truvunac, activista, editor; Dr. Irena Ristic, profesor en la facultad de arte dramático. **Suecia:** Marcus Carlstedt, sindicalista Estocolmo; Sanna Olsson, militante del Partido de Izquierda, Estocolmo; Brigitta Loewander, socióloga, miembro de la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares; Conny Hanson, diseñador; Inga Palmer, artista; Women for Peace; Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space. **Suiza:** Beppe Savary-Borioli, diputado Gran Consejo, Foro Alternativo; Boas Erez, universitario, Tribuna Libre; Jacques Pous, historiador; Blaise Crouzier, arquitecto, sindicato UNIA; Tarek Idri, secretario Movimiento Suizo por la Paz; Allison Katz, jubilada, OMS miembro People's Health Movement; Günter Baigger, miembro PSS; Nathan Finkelstein, Colectivo Emergencia Palestina Ginebra; Florian Aicher, Movimiento marxista-leninista de Suiza; Comité cantonal del SEV-TPG (sindicato de transportes públicos de Ginebra). **Ucrania:** Yurii Sheliazhenko, Movimiento Pacifista Ucraniano.

Crónica del mitin internacional en París, el 5 de mayo

«Sus guerras no son las nuestras, organicémonos ya»

Mélinda Sauger, del Partido Obrero Internacionalista: Da la bienvenida a los 2.500 militantes presentes. La asamblea es parte de la «lucha contra las masacres que se están perpetrando en Gaza». «Las acusaciones de antisemitismo, de apología del terrorismo... inventadas por Gobiernos, no nos harán retroceder ni un milímetro». «Solidaridad total con todos los que sufren presiones y represión». «Debemos uniros contra la guerra por un alto el fuego, contra los regímenes que aplastan y explotan a los pueblos. Manifestarnos y trabajar juntos para informar, para convencer a los que dudan. Tenemos que hacer comprender a todos los dirigentes de las grandes centrales sindicales que se acabó el tiempo de las tergiversaciones y los falsos compromisos».

Habla José Nivoi, responsable del Colectivo Autónomo de Estibadores y Trabajadores Portuarios de Génova, Italia: Se oponen al transporte y la manipulación de armas en el mayor puerto de Italia desde 2019. Bloquearon la carga de armas en buques el 19 de noviembre «tras el llamamiento de los sindicatos palestinos a los trabajadores [...] contra la compañía Zim, una empresa israelí que comercia con Israel y que tiene su sede en Génova».

Markus Sokol, de la IV Internacional, miembro de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores del Brasil y promotor de «Diálogo y acción petista»: Quince meses después de la elección de Lula «el cuadro general no incita al optimismo a las fuerzas sociales que trabajaron por su elección». «Ni la Central Única de Trabajadores (CUT) con sus sindicatos, ni el Movimiento de los Sin Tierra, ni los parlamentarios del Partido Comunista, con escasas excepciones, se han implicado en las manifestaciones» por el alto el fuego.

Yessa Beljoya, del colectivo de defensa de los Jóvenes de Mantois, coorganizadora de la marcha contra el racismo, contra la islamofobia y por la protección de todos los niños el 21 de abril: Pronuncia un discurso conmovedor y decidido.

Haim Bresheeth, fundador de la Red Judía por Palestina y profesor universitario en Londres: Nacido en el seno de una familia judía exterminada en los campos nazis. Abandonó el Partido Laborista para denunciar a la dirección que había excluido a Ken Loach, Moshe Machover, Jackie Walker y muchos otros por... «antisemitismo». Está al frente de las grandes movilizaciones contra el genocidio en Palestina.

Jana Silverman, sindicalista y profesora universitaria: «Les traigo un caluroso saludo socialista de los Socialistas Democráticos de América (DSA)», organización política de Estados Unidos con casi 100.000 miembros. «Nos negamos a luchar a favor de la maquinaria bélica israelí. También quiero saludar a los miles de estudiantes que están por todos los Estados Unidos, en Berkeley, Yale, y en todas partes. Como DSA, no pararemos: boicot, desinversión, no pararemos [...]».

En las últimas dos semanas, ha habido más de cuarenta actuaciones policiales en los campus de EEUU, atacando a los estudiantes, están ha-

ciendo añicos el mito de la 'libertad universitaria'. En Gaza, los israelíes han destruido las universidades, allí no queda ni una sola universidad, es un 'escolaricidio'».

Lybon Mabasa, militante de la IV Internacional, dirigente de la Conciencia Negra Sudafricana durante muchos años y hoy responsable del Partido Socialista de Azania: «Vengo de un país que ha denunciado a la entidad sionista ante la Corte Internacional de Justicia. Hemos formulado la acusación de asesinato deliberado de niños, de mujeres, de ataque contra personas inermes. Este tribunal de justicia, que no representa al pueblo, falló a favor de Sudáfrica y reconoció que en Palestina se estaba produciendo un genocidio».

El conoció muy bien el apartheid «Desde 1948, cuando el apartheid se convirtió en ley en Sudáfrica, se ha comparado el apartheid sudafricano con el apartheid israelí. Ha habido muchas cosas similares, los desplazamientos de población y los blancos eran sólo el 6% de la población, pero se reservaron el 92% de la tierra. Pusieron a los negros en zonas secas, donde era imposible vivir. Mataron a los negros». ¿Y hoy? «Tenemos libertad, pero los blancos siguen poseyendo el 87% de la tierra. Los negros no tienen nada. La lucha continúa».

Andrej Hunko, diputado en el Bundestag alemán, «abandonó hace un año el partido Die Linke para formar un nuevo partido, la Alianza Sahara Wagenknecht», «un verdadero partido antibelicista» hace unos meses: Copresidente del grupo parlamentario de la izquierda en el Consejo de Europa con la diputada de Francia Insumisa Anne Stambach-Terreoir. Impulsor del Comité Europeo de Enlace contra la Guerra, informa a la asamblea de que el comité se había reunido por primera vez en París el 4 de mayo. «Si las guerras pueden empezar con mentiras, la paz puede empezar con la verdad».

Por último, Jérôme Legavre, militante de POI y diputado de la Francia Insumisa: Clausura la asamblea saludando y apoyando la lucha de los estudiantes estadounidenses, que recuerda a la de los estudiantes contra la guerra de Vietnam. Defiende la lucha por el alto el fuego de Francia Insumisa, arrastrada por el fango por todo el «arco republicano» desde el 7 de octubre. Los participantes corearon «Unión Popular».

Al final de la asamblea, todos los oradores subieron al escenario con los militantes que habían participado la víspera en el Comité de Enlace Europeo contra la Guerra. Cantaron la Internacional. Durante más de una hora se ha prolongado la discusión entre militantes.

Corresponsal

Se reúne el Comité de Enlace Europeo contra la Guerra

Militantes de dieciséis países reunidos contra la guerra.

El Comité de Enlace Europeo contra la Guerra (CILE) se ha reunido por primera vez presencialmente el sábado 4 de mayo en París.

En los locales del POI, Adrien Duquesnoy ha saludado uno por uno a los treinta y cuatro militantes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, y Ucrania. Todos conscientes de la gravedad de la situación, y también de la importancia de celebrar esta reunión.

En representación de los miembros de ese comité en el Estado español participó el sindicalista del metal Pablo García-Cano.



La redacción de nuestro periódico se sumó a la convocatoria de la Marcha por la República del 16 de junio difundiendo la convocatoria y proponiendo a todos nuestros lectores y colaboradores que hicieran lo mismo, así como a los colectivos y organizaciones con los que mantenemos relación y actividad en común.

En esta página os hacemos llegar las actividades de preparación de esta Marcha en las que directamente participamos o las que nuestros corresponsales nos hacen llegar.

La lucha por la República forma parte del origen y objetivos de nuestro periódico, tal como encontraréis en la declaración del Comité de Redacción en la página 10 de cada ejemplar:

«[...] Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del Tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan [...]»



El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos llama a preparar y participar masivamente en la Marcha por la República del 16 de junio

Numerosas organizaciones llaman a una marcha estatal por la República el 16 de junio en Madrid, en el décimo aniversario de la subida al trono de Felipe VI.

El CATP, en su encuentro estatal del 27 de abril, decidió dar su pleno apoyo a esta convocatoria.

La movilización no puede ser más oportuna. Se produce cuando se evidencia la corrupción generalizada del régimen de la Monarquía a través de los escándalos de venta de mascarillas. En plena pandemia, cuando la población vivía angustiada y los sanitarios se jugaban la vida atendiendo a los enfermos de Covid sin medios de protección, unos pocos aprovechaban para hacer su agosto. El régimen está corrupto desde su cúpula hasta la última de sus instituciones.

La convocatoria se produce cuando vemos cómo el aparato judi-

cial heredado del franquismo, ayudado por medios de prensa subvencionados por los partidos franquistas de derecha y de ultraderecha, arremete contra todo el que pueda molestarle. Fueron 20 querrelas falsas contra Podemos, la expulsión de Alberto Rodríguez del Parlamento con pruebas falsas, la persecución contra Mónica Oltra, contra los republicanos catalanes, con más de 1.500 procesados, contra luchadores y luchadoras de Cádiz, de Zaragoza, las acusaciones contra la esposa del presidente del Gobierno que buscan hacer caer al Gobierno completo ...

El franquismo político y el aparato de Estado se conjuran contra la Ley de Amnistía, la bloquean desde el Senado, amenazan con bloquearla en el Constitucional y boicotear su aplicación en los tribunales. Contra la amnistía se pronuncia todo el aparato

de Estado heredado del franquismo: asociaciones de jueces, de inspectores de Hacienda, de inspectores de trabajo ... No quieren que se ponga fin a la persecución contra el pueblo catalán emprendida en 2017 por órdenes del propio Felipe VI, en su infame discurso del 3 de octubre. Quieren que se mantenga toda la legislación represiva, presidida por la Ley Mordaza.

La lucha por la República no es una nostalgia del pasado. En muchos aspectos, es más actual que nunca. Recordemos que el art. 6 de la Constitución de la II República decía que «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional». Luchar por la República hoy es luchar contra la guerra en Ucrania, contra los gastos militares, contra el genocidio en Gaza.

40 años de experiencia, incluyendo gobiernos del Partido

Socialista y el actual «gobierno progresista» nos demuestran que sin acabar con la Monarquía y las demás instituciones heredadas de la dictadura cualquier avance va a ser boicoteado por esas mismas instituciones. Y que someterse a ellas condiciona gravemente cualquier posibilidad de aplicar una política favorable a la clase trabajadora y los pueblos del Estado español.

En esta situación, una masiva marcha por la República en Madrid puede ser un avance muy significativo en la lucha por cambiar las cosas. Por avanzar hacia la unidad de trabajadores y pueblos en la lucha por una República que no sea un mero cambio de un rey por un presidente, sino una República del pueblo y para el pueblo, basada en los derechos de los pueblos y naciones del Estado español. Concebimos la

lucha por la República como la conclusión necesaria de la lucha por las reivindicaciones, por la paz, contra el aumento de gastos militares, para que ese dinero se destine a salvar a la sanidad y la enseñanza públicas, a los servicios sociales, a inversiones productivas, por la ruptura de relaciones económicas, militares y diplomáticas con el Estado de Israel, por la derogación completa de las reformas laborales y de la Ley Mordaza, por la separación real de la Iglesia y del Estado, por la defensa del sistema público de pensiones, por la igualdad real de hombres y mujeres, por el derecho a la vivienda y por un futuro para la juventud.

El 16 de junio llamamos a participar masivamente en la marcha en Madrid, y desde ahora llamamos a prepararla con actos y reuniones en todas las localidades del Estado

Crónica del 16J, una primera Marcha por la República

De norte a sur, de este a oeste, las acciones de preparación y organización se suceden y, como era previsible, de forma plural, incorporando muchas y variadas organizaciones, activistas provenientes de diferentes círculos políticos, sindicales, culturales e incluso institucionales. Si tomamos aproximadamente el mes de febrero como referencia podemos encontrar multitud de actos en los cuales nuestro colectivo encuentra su lugar.

● Podemos empezar por el 19 de abril en el Ateneo del Cloe de Barcelona, donde conocidos activistas como Diosdado Toledano (Plataforma por la Paz, OTAN NO); Ramón Franquesa (Coordinadora de Movimientos Sociales y Sindicatos Alternativos de Cataluña); Toni Barberá (Portavoz de Marea Blanca de Catalunya); Rosa Cañadel (exportavoz de la USTEC) y Ángel Tubau (Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos) y actuando como presentador Jorge Fernández, presentaron a su vez sus razones para apoyar la Marcha.



Concha Real (trabajadora del SAD municipal); Almudena Gil (IU Getafe); Julio León (poeta); Vicente Gil (actor).

● Igualmente en Getafe (Madrid) la presentación se hace con la presencia de Rafa Mayoral (Grupo Motor Marcha 16J); Yolanda Hidalgo (PCE Getafe); Karima Chedid (Más Madrid Compromiso por Getafe); Jesús Béjar (POSI Getafe); Carlos Enjuto (Podemos Getafe);

A destacar a nivel institucional que en el Parlamento de Navarra se presenta una moción de apoyo a la Marcha 16J, que ya de por sí su presentación es una victoria para la lucha por la República.

● De Bilbao nos llegan noticias de actividades diversas, como dos mesas públicas de difusión con un acto previo de presentación de la Marcha que han dado lugar a que el lunes día 20, en una reunión a la que asistieron 11 personas, se constituyera el "Grupo Motor 16j - Bizkaia", con el objetivo de garantizar autobuses y celebrar un acto final antes de la Marcha.

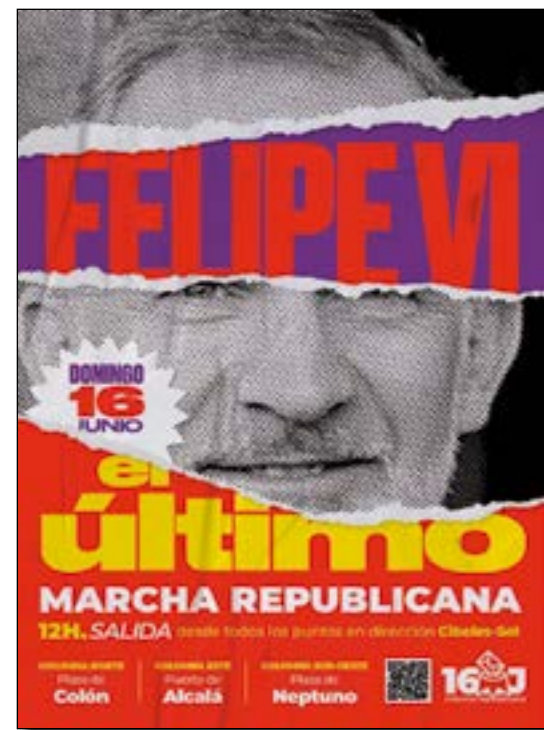
Hay también otros aspectos de la lucha por la República que ocupan un lugar importante, como es la recuperación de los hechos de la época entre 1931, el franquismo y la llamada Transición, y por eso la importancia del acto que se celebró en el pueblo minero de Ortuella, o la realización de la Bajada por la Ría del Nervión de un Barco Republicano que este año se ha convertido en un apoyo para el 16J, o los grupos de difusión de la campaña organizados en torno a actos institucionales en Zornotza-Amorebieta o Sestao.

● En Vitoria - Gasteiz la forma que adopta la

presentación de la campaña va de la mano de Antolín Pulido, que organizó el 16 de mayo una charla sobre el tipo de república que propone el Centro Cívico del Campillo .

● De Tarragona nos indican que el Acto de presentación será el día 27 de mayo y habrá un elenco de personas a título individual (cineastas defensores de los derechos humanos, activistas internacionales...) combinados con colectivos como Mujeres Republicanas, el CATP, el Grupo Motor de la propia Marcha, etc.

● Los corresponsales de Sabadell nos informan de que el día 23 de mayo se ha celebrado una asamblea informativa en el Centro Cívico de Can Balsach y desde Valencia nos envían el cartel que reproducimos en el que se anuncia un acto en Paiporta el 31 de mayo del Partido Comunista del País Valenciano (PCPV), el Colectivo de Mujeres Republicanas y el CATP.
Mikel González (Bilbao)



El CATP ha publicado el boletín n.º 3 que contiene las intervenciones habidas en el Encuentro Estatal del 27 de abril. Podéis descargarlo en: <http://informacionobrero.org/boletin-3-catp/>

VI Asamblea Estatal de COESPE

Los próximos días 28 y 29 de mayo de 2024 tendrá lugar en Pinto la VI Asamblea Estatal de la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Durante las semanas previas a la asamblea se han debatido las enmiendas a los documentos y se ha elaborado la tabla reivindicativa, además de avanzar en la organización interna de la COESPE.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones se constituyó en la movilización por la defensa del sistema público de pensiones, contra los intereses del capital financiero, la patronal y los Gobiernos

que imponen políticas en contra de los intereses de los pensionistas, trabajadores y trabajadoras.

Las cotizaciones sociales de la Seguridad Social pertenecen a las personas trabajadoras en activo y a las que durante su vida laboral han aportado sus cotizaciones a la Seguridad Social, con retenciones a salarios destinadas a poder tener una pensión digna tras la jubilación, por lo que ningún Gobierno tiene derecho a destinarlo a otros fines que no sea exclusivamente el pago de las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social. Por eso durante estos

dos últimos años desde la V Asamblea en los «Lunes al Sol», que se convocan en cientos de pueblos de todo el Estado y cada mes ante las Cortes, la exigencia de que se cumpla la Ley y se realice la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social es irrenunciable.

Con seguridad que los debates y acuerdos a los que lleguen los delegados y delegadas serán puntos de apoyo para seguir defendiendo el sistema público de pensiones.

¡Goberne quien gobierne, las pensiones se defienden!

Corresponsal



Pablo García-Cano de CCOO se dirige a la asamblea

Tras siete años de lucha nos reunimos en Bilbao para unir fuerzas a nivel estatal

Después de siete años desde que el movimiento de pensionistas se levantara contra el 0,25 % de subida de las pensiones del Gobierno Aznar, se ha celebrado un acto público donde portavoces y defensores de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y de su programa de reivindicaciones nos hemos podido reunir en Euskadi, en

este caso en Bilbao. Se trataba de posibilitar, y así ha sido, que la principal organización de pensionistas del Estado español pudiera presentar su balance de estos años de lucha, su valoración de la actual situación política y social y presentar sus objetivos para a la VI asamblea de su organización, a celebrar los días 28 y 29 de mayo en Pinto (Madrid).

Como sus portavoces manifestaron, todos los materiales dispuestos para dicha asamblea son públicos, están en su página web (<https://www.coespeweb.es/vi-asamblea-estatal-coespe>), lo que indica su carácter fundamentalmente democrático.

Tampoco es de desdeñar el hecho de que los convocantes del acto, organismos nacidos al calor del propio movimiento de pensionistas, tengan distintos orígenes pero se hayan puesto de acuerdo al respecto, y así tenemos Coordinadoras como las de Bizkaia y Euskadi o la Plataforma UNIDAD que, con base en Uribe Kosta (Margen derecha de la ría de Bilbao), hayan difundido las convocatorias estatales, especialmente las Marchas. Y deberemos resaltar especialmente la valentía de los compañeros de Zornotza-Amorebieta de sumarse al acto conociendo las presiones políticas que en Euskadi tienden a lo que se denomina «marco autónomo» y que en el movimiento de pensionistas no son pequeñas.

El acto, celebrado y convocado conjuntamente con el colectivo de Sindicalistas por la Auditoría, fue presentado y moderado por Marisa Gadea, activista del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia y Silvia Martínez de Sindicalistas por la Auditoría.

Antes de dar paso a las intervenciones y a un rico debate con los asistentes, los portavoces y presentadoras nos aportaron una cuantiosa información y un análisis lúcido que solo puede ser fruto de la experiencia sobre las reivindicaciones que asume COESPE, los profundos argumentos para ellas y muy especialmente los que nos traen a este acto por la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.

A este respecto fue innovador para algunos de los presentes oír de primera mano los detalles de las acciones y circunstancias que unieron movilización y vida política parlamentaria donde de nuevo destaca el nombre de

Jordi Salvador que, como parlamentario, estuvo y está a la cabeza de la conquista que supone la Ley 21/2021 que obliga a realizar la auditoría.

Los portavoces de COESPE nos plantearon un reto que la mayoría de los asistentes acogemos con voluntad de hacerlo realidad, y es el de ayudar a recuperar un colectivo de pensionistas que viviendo en Euskadi solicite su participación en esta organización, que se integren en ella en lucha por la unidad de todos los pensionistas y contra todo intento de romper la caja única, que es el instrumento privilegiado hoy por hoy para privatizar las pensiones públicas y finalmente destruirlas. Como varios de los ponentes indicaron el enemigo es fuerte, es la Banca, es la UE, es el FMI, es el Banco de España, son los Gobiernos a su servicio, y por tanto solo siendo muchos podemos defender lo logrado e incluso mejorarlo.

Tasio Aritza
País Vasco - Euskal Herria



Así funciona en Álava la especulación financiera disfrazada de pensiones de empleo

El 10 de mayo el grupo político de «Elkarrekin Araba PODEMOS / Ezker Anitza / Equo / Alianza Verde» presentó una moción en las Juntas Generales de Araba que era muy clara en su título, y proponía que dicha institución se pronunciara «Contra la promoción pública de la privatización de las pensiones a través de las EPSVs y otros sistemas privados complementarios de pensiones».

Dice así: «Mozioaren edukia / Contenido de la moción:

1.- Las Juntas Generales de Álava declaran su firme apoyo y compromiso con el sistema público de pensiones, basado en un modelo social solidario de reparto, y rechaza la promoción e incentivo, desde la Administración

pública, de sistemas privados complementarios de capitalización de pensiones, que generan desigualdad y descohesión social, y se ponen a disposición de los entes financieros privados y fondos de inversión para potenciar sus beneficios.

2.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que, en el marco de su competencia fiscal, proponga una reforma armonizada que suprima todos los incentivos fiscales y deducciones al ahorro mediante planes de pensiones, EPSV y otros sistemas complementarios de pensiones, por tratarse de un modelo segregador y regresivo, que condena al ostracismo social a una gran parte de las personas trabajadoras, entre ellas las más

precarizadas, que se ven obligadas a subvencionar fiscalmente a quienes se encuentran en mejores condiciones sociales y económicas, y descarte la recuperación de deducciones en el Impuesto de Sociedades en las EPSV de empleo preferentes».

La respuesta del PNV / PSE-EE-PSOE es clarificadora, apoyando precisamente el camino tomado de privatizar con dinero público las pensiones a través de inversiones financieras llamando fraudulentamente «pensión» a lo que es una simple inversión financiera.

«Ordezkatze zuzenketa / Enmienda de sustitución

1. Las Juntas Generales de Araba instan a la Diputación Foral de Araba

a impulsar, en el marco del proceso de revisión tributaria, los sistemas de previsión social voluntaria, potenciando la implantación de los sistemas de empleo preferente».

Bildu refuerza su apoyo a estos mismos planes de privatización/desmantelamiento del sistema público con más letras, con el mismo fervor y por supuesto introduciendo la coletilla soberanista que solo quiere decir... ¡rompamos la caja única cuanto antes, deprisa!

«2. Las Juntas Generales de Araba instan a las diferentes instituciones con competencia en la materia a realizar los cambios legislativos oportunos para que las EPSVs que lo deseen confluyan en una EPSV de carácter público, que se convierta en

uno de los pilares de un futuro Fondo Soberano Vasco

3. Las Juntas Generales de Araba instan a la Diputación de Araba a revisar las medidas fiscales de las EPSVs, con el objetivo de promover la progresividad y combatir la brecha de género, entre otros.

4. Asimismo, las Juntas Generales de Araba instan a la Diputación de Araba a que en esa revisión de las medidas fiscales de las EPSVs se dé un tratamiento diferenciado a las EPSVs de empleo (siempre que sean fruto del acuerdo entre empresas y sindicatos y de carácter voluntario para las y los trabajadores) frente a las EPSVs individuales».

MGS

El Gobierno incumple los acuerdos de Función Pública ¿A qué esperan los sindicatos?

En octubre de 2022, la ministra de Hacienda y Función Pública, M^a Jesús Montero, firmaba con CCOO y

UGT un «Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI». CSIF se negó a firmar.

Entonces, este periódico publicó un artículo que criticaba fuertemente el acuerdo.

Ese acuerdo incluía varias cuestiones. En primer lugar, subidas salariales para 2022, 2023 y 2024. En mayo de este año, la subida del 2% pactado para este año aún no se ha producido y no se sabe cuándo se va a producir. El Gobierno se negó a atender la propuesta de los sindicatos de incluirla en el decreto de medidas de urgencia que se aprobó cuando se decidió que no iba a haber ley de presupuestos este año, y dice que está buscando cómo tramitarla.

El acuerdo incluía también varias cuestiones, que debían haberse hecho realidad antes del 31 de diciembre de 2023 y que no se hicieron. El Gobierno atrasó las decisiones co-

respondientes, y luego se escudó en la convocatoria de elecciones anticipadas, primero, y en la tardanza en formar Gobierno, después, para no aprobarlas.

Entre ellas estaba la recuperación del derecho a la jubilación parcial anticipada. Tampoco en este terreno hay avances. Ahora el ministro Escrivá dice que tiene que estudiar el impacto económico de la medida. Que fue firmada en su día por la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, y hoy vicepresidente del Gobierno y ministra de Hacienda, que debería saber cuánto costaba lo que estaba firmando.

También incluía el acuerdo, entre las medidas a implementar en 2023, la aplicación de la clasificación de los empleados públicos prevista en el ar-

tículo 76 del EBEP, y paralizada por la transitoria tercera del propio EBEP. Una medida que supondría sustanciosas subidas salariales para una parte importante del personal, sobre todo en la sanidad. De la aplicación de esa medida nada se sabe, y CCOO ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional para que se cumpla.

Mientras esto sucede, los sindicatos de la Función Pública no convocan movilizaciones. Deberían recordar que se deben a las necesidades de los empleados y empleadas públicas, y no a las del Gobierno, por muy «progresista» que este se declare. No pueden olvidar que, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden.

Héctor Lagar



El coordinador de CCOO, Humberto Muñoz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario general de UGT, Julio Lacuerda, tras la firma del acuerdo de subida salarial en la función pública

País Valenciano: huelga general en la enseñanza pública



El 23 de mayo estaba convocada por todos los sindicatos de la enseñanza huelga en la enseñanza pública del País Valenciano, con el apoyo de PSPV y Compromís. Tras diez meses de gobierno en la Generalitat del PP y Vox, se anuncian recortes brutales en la enseñanza pública, pero también en la sanidad pública. Según el Gobierno valenciano, cinismo no les falta, solo se trata de «reorganizar» y «evitar imprecisiones».

Los motivos de la huelga

Recortes presupuestarios: de 120 millones (un 40 %) para la construcción de colegios e institutos públicos; de 109 millones (el 50 %) en la Formación Profesional; eliminación de 206 aulas de Infantil y Primaria (ya se sabe la excusa: «la baja natalidad»); recortes en las Escuelas Oficiales de Idiomas que afectarán a 8.500 alumnos, 244 grupos y a 61 profesores.

Privatización y segregación: la imposición del «distrito único» que, según un estudio del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, «aumenta el negocio de la concertada y deteriora la calidad de la escuela pública», dado que el 70 % de los centros concertados cobran cuotas «voluntariamente obligatorias» que van a financiar a las órdenes religiosas que los rigen. Cuotas que está prohibi-

do cobrar pero que «ningún Gobierno, de uno u otro color político, ha querido enfrentar y que es el principal factor de segregación del alumnado más pobre». En un contexto de «15 años de recortes en la inversión en la enseñanza pública, que se degrada y hace que la concertada se lleve cada vez más parte del pastel», según los autores del estudio. Es fácil encontrar en esto una aplicación a la enseñanza del decreto de las «macroáreas» en sanidad: privatizar y desmantelar todos los servicios públicos.



Ataque a la lengua de los valencianos: la nueva ley de «libertad educativa» permitirá también a los padres «votar la “lengua base” de la enseñanza en cada curso de cada centro», lo que supone ir eliminando progresivamente el valenciano de la enseñanza pública.

Junto a estas reivindicaciones, los profesores reclamaban también el aumento de los salarios y reducir las ratios.

La huelga fue un éxito

La huelga fue seguida por 47.500 docentes (68 % de la plantilla), con manifestaciones en 11 ciudades que movilizaron a 15.000 docentes, en muchas ocasiones agrupados con pancartas de centro. Las manifestaciones fueron encabezadas por los sindicatos y contaron con la asistencia de representantes del PSPV y de Compromís. En ellas se pidió la dimisión del consejero de Educación y la retirada del «distrito único».

La respuesta del Gobierno valenciano

Dos días después de la huelga, Rovira, el consejero de Educación, anunció la anulación del acuerdo de plantillas firmado el año pasado por los sindicatos y el anterior Gobierno valenciano para la contratación de 5.000 profesores este curso, «nulo de pleno derecho por carecer de los controles necesarios, de los informes de impactos oportunos y de presupuesto para su aplicación».

Los recortes han de aplicarse el próximo curso, las espadas siguen en alto.

BO

«Madrid es la comunidad que más destina a la privada»

Entrevistamos a Pepi Afonso, profesora en huelga del IES Satafi

Información Obrera: ¿Cuáles fueron las principales razones por las que decidió participar en la huelga del 8 y 21 de mayo?

Pepi Afonso: Queremos volver a tener 18 horas lectivas, reducir la ratio de alumnos por clase y asegurar que haya suficientes recursos para atender la diversidad de necesidades de nuestros estudiantes.

IO: ¿Cómo se organizó la huelga?

PA: Nos organizamos en asambleas de centro y de zona. El día de la huelga, los de Getafe nos distribuimos por zonas para estar en los piquetes y llegar a los centros en los que no se habían constituido asambleas. Nos concentramos por la mañana en la Plaza de Ayuntamiento y se decidió ir a la manifestación a Madrid cada centro con su pancarta. Fue masiva la asistencia.

IO: ¿Cuál fue la participación?

PA: La participación fue muy alta en torno al 65% según sindicatos. En mi centro, el 40% del profesorado hizo huelga.

IO: ¿Cómo se sintió al participar en la huelga? ¿Qué le dejó esta experiencia?

PA: Participar en la huelga fue una experiencia muy fortalecedora. Me sentí respaldada por mis compañeros y más determinada que nunca a lu-



char por nuestros derechos y por una educación de calidad. Esta experiencia me ha dado una mayor conciencia de la importancia de estar organizada y de la acción colectiva.

IO: En su opinión, ¿cuáles son las principales dificultades para lograr estos cambios?

PA: Madrid es la comunidad que más destina a la enseñanza privada y concertada. Deteriorando la enseñanza pública se promociona la privada y concertada. El gran reto es luchar por una enseñanza laica y pública y que el dinero público sea para la enseñanza pública.



Entrevistamos a Conchi Abellán, coordinadora de Podem Catalunya

Información Obrera: ¿Por qué una candidatura a las europeas?

Conchi Abellán: La candidatura de Podemos a las europeas encabezada por Irene Montero lo que pretende es dar voz y apoyar una gestión a favor de los desfavorecidos en una Europa donde la derecha avanza a pasos agigantados, dispuesta no solo a quitarnos los derechos que tanto nos ha costado alcanzar durante todos estos años, sino que también quiere claramente negarnos el futuro. Y en eso debo insistir, nuestro mensaje no es para mantenernos en lo que tenemos ahora frente a la llegada de la derecha, sino que hay que seguir empujando más transformaciones y avanzar en más conquistas y derechos. No hemos venido a ponerle buena cara a quienes quieren seguir precarizándonos la vida y tenernos en un rincón con miedo a sentir y a pensar diferente, estamos

aquí para plantarles clara con decisión y sin titubeos. Y en el Parlamento Europeo, queramos o no, lo que se está discutiendo es qué modelo de Europa queremos, si la de recortes, especulación y corrupción o la de derechos, transparencia y solidaridad territorial.

Por todos es conocido que se avecina una oleada de recortes y desde Podemos estamos dispuestas a poner el cuerpo para hacerle frente en España y en Europa para que eso no pase.

IO: ¿Por qué votar a Podemos y no a Sumar?

CA: Esto es una pregunta trampa. La pregunta debería ser ¿Por qué, desde todos los ángulos, Podemos es atacada? ¿Por qué quieren hacer desaparecer nuestro espacio? Los medios de comunicación han hecho y están haciendo todo lo posible y más por destruir nuestra organización. Ya sabes que mal llamados periodistas se encargan de hacer correr los bulos y las mentiras.

Solo esa diferencia es muy clarificadora entre Sumar y Podemos. Nosotras no jugamos a competir con Sumar, y es verdad que por el mero hecho de haber compartido tiempo y acciones aparecemos como dos movimientos enfrentados, pero en Podemos tenemos claro dónde estamos, a quién defendemos y por qué seguimos aquí y es donde centramos todas nuestras energías. Nosotras queremos estar en Europa para garantizar

que allí se habla y se trabaja para la ciudadanía y no para las multinacionales y los lobbies que pretenden seguir expoliando nuestros hogares y nuestra tierra.

Por ejemplo, nosotras cuando estábamos en el Gobierno ya hicimos una propuesta para renovar el CGPJ, pues es una verdadera vergüenza por parte de los que dicen defender la Constitución que se siga con un CGPJ caducado, pero se nos obligó a retirarla en aquel momento. Ahora nada impide al Gobierno Pedro-Yolanda que legislen o que ofrezca una alternativa. Pues bien, el pasado 30 de abril, Podemos presentó una propuesta que rebaja las mayorías exigidas en caso de que no haya acuerdo. Y esto es un tema central.

Otro ejemplo: mientras el pueblo palestino es masacrado y objeto de un verdadero genocidio, el Gobierno Pedro Sánchez-Yolanda Díaz manifiesta que el día 28 será reconocido el Estado palestino por el Gobierno de España. Bien, sin duda un paso, pero ¿sobre qué fronteras? Y sobre todo ¿sobre qué personas? Porque lo más urgente, lo inmediato es hacer un alto al fuego, lo inmediato para los palestinos es poder vivir, ya no digo ni siquiera dignamente, digo vivir, que no sigan teniendo bombas diarias, viendo como masacran a vecinos y vecinas o perdiendo familiares, así que el gesto del reconocimiento de Palestina, aunque llegue tarde, está bien, pero lo que se necesita es valentía, por tanto, el Gobierno debe desde ya romper relaciones con Israel y detener el envío de armas.

Como dice nuestro programa, por un futuro de paz y derechos. Y sin olvidar la participación del Gobierno en la guerra Ucrania-Rusia. Sabes que de nuestra posición al respecto de la guerra hubo un antes y un después en nuestras relaciones con Yolandita, y nuestra salida del Gobierno. Para Podemos la paz es innegociable. Queremos que Europa deje de ser el espacio del consenso bélico, que no se merecen nuestras ciudadanas. No queremos la guerra, ni por acción ni por omisión y tampoco en defensa propia. Sólo hay una salida a la guerra y es la vía diplomática y que todos los países pongan de su parte para frenar el apoyo a países que siguen alimentando el horror.

IO: Vuestro programa es extenso. ¿Podrías destacar los puntos más importantes?

CA: Sin duda el más importante hoy es el alto al fuego y el genocidio en Palestina. La agricultura en Europa. Exigir la intervención para desbloquear la renovación del CGPJ, la derogación de la Ley Mordaza que no puede convivir en una Europa de derechos, políticas de sanidad y educación pública, pensiones justas, todo ello frente a los recortes que se plantean desde Bruselas, el derecho a la vivienda, frenar a los fondos buitres prohibiendo que sigan especulando en Europa, por una ley del aborto en todos los países de la UE, por el consentimiento en el centro de las relaciones, por trabajar 30 horas y así tener el reparto laboral más equitativo. Por eso lo importante no es solo votar, sino también organizarse frente a ello.



El Congreso acuerda tramitar una ILP sobre regularización extraordinaria de migrantes

Por amplia mayoría (310 a favor y 33 en contra), el Congreso de los Diputados ha acordado la toma en consideración de una ILP impulsada por la organización *Regularización Ya*.

La proposición de ley, avalada por más de 600.000 firmas ciudadanas, consta de un artículo único que modifica la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La ILP propone abrir un proceso de regularización para los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021, lo que se calcula que puede afectar a más de 500.000 inmigrantes, que forman parte de la clase trabajadora, sometidos a la peor explotación por patronos que se aprovechan de su situación irregular.

Aunque todos los partidos con representación en el Congreso, excepto Vox, votaron a favor de su tramitación, varios se reservaron la posibilidad de presentar enmiendas, por lo que el texto final puede ser distinto de la proposición aprobada.

Patxi López (PSOE) explicó que «votaremos a favor porque queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración, pero ni barra libre, ni cerrar fronteras, de forma inteligente». Y anunció que su grupo propondría modificaciones al texto durante la fase de enmiendas.

La portavoz del PP, Sofía Acedo, anunció desde la tribuna que con su voto querían «poner frente al espejo al Gobierno», y que votaban sí porque «así nos lo han pedido las entidades que trabajan con inmigrantes y los empleadores que necesitan mano de

obra».

El diputado de ERC, Jordi Salvador i Duch, calificó el problema como «una forma moderna de esclavitud». Sumar, a través de Gala Pin, habló de «justicia reparatoria en un sistema capitalista que reposa en un colonialismo estructural».

Mikel Legarda (PNV) explicó la intención de su grupo de que la iniciativa «se reorienta a una regularización extraordinaria, caso a caso, por motivos humanitarios, reagrupaciones familiares o vinculada a razones económicas y demográficas». Por tanto, un proceso limitado.

Superado el trámite de toma en consideración, la ILP avanza ahora a su siguiente fase parlamentaria, el plazo de enmiendas. Y tomemos nota de lo que ha dicho el diputado vasco Iñarritu: «existe el riesgo, y no quiero ser agorero, de que esta iniciativa sea hoy aprobada pero quede en un congelador durante toda la legislatura».

La movilización de más de 900 organizaciones, incluyendo asociaciones y plataformas de inmigrantes y otras organizaciones antirracistas, ha impuesto la tramitación de esta ley. Pero la plataforma *Regularización Ya* demanda una regularización permanente y sin condiciones, contrariamente a lo que expresaba el diputado del PNV Legarda.

Información Obrera defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tengan o no reconocida su situación en España. Porque la existencia de trabajadores sin derechos, carne de cañón para la explotación sin límites por parte de empresarios sin escrúpulos, afecta a toda la clase obrera. Basta con ver situaciones como la de la fresa en Huelva, donde la presencia masiva



de inmigrantes «sin papeles», contratados por cuatro perras y sin derecho de organización o huelga, en situación, como señalaba Jordi Salvador, de esclavitud, presiona a

la baja sobre el convenio colectivo del campo, uno de los que tiene salarios más bajos y peores condiciones de todo el Estado.

HL

La negación del derecho de asilo

Recientemente, siendo presidente de turno del Consejo Europeo Pedro Sánchez, culminó la negociación de una nueva norma europea contraria al derecho de asilo y al de inmigración. Se pusieron de acuerdo para poner más trabas al ejercicio del derecho de asilo.

En la misma onda, la Sra. Meloni promueve un castigo de los solicitantes de asilo que quieran entrar ilegalmente en Italia a una deportación a campos de concentración en Abisinia. Tiene nostalgia de los tiempos en que Abisinia era una colonia italiana (en particular con su antepasado político Mussolini).

Y hay 15 países europeos que suscriben la misma iniciativa, que Europa cree campos de concentración alejados: Dinamarca, la República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia.

A la vez, el primer ministro británico dimite y propone para que le reelijan la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda.

En democracia, el derecho de asilo es un derecho sagrado, ligado a la defensa de la vida, que tradicionalmente ha servido para diferenciar a los regímenes democráticos. Ningún Gobierno tiene derecho a decidir quién puede pedir asilo, ni a castigar a quien pida asilo.

M.C.

Pagamos las facturas de la falsificación verde



La vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones, Teresa Ribera; el director general de la AIE, Faith Birol, y el director general de la COP28, Adnan Amin, reunidos en la Cumbre Internacional sobre Clima y Energía en el Teatro Real de Madrid

Se han publicado nuevos datos que agravan los que ya sabíamos. El conjunto de los países más desarrollados, lejos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), ha aumentado la carbonización.

Por lo menos desde la cumbre de París de 2015, todas las potencias se comprometieron a bajar la emisión de esos GEI. Desde 2019, la Sra. Ursula von der Leyen impuso en Europa unos calendarios draconianos para efectuar esta reducción.

En la última cumbre, celebrada en los Emiratos (país que vive de aumentar la producción de hi-

drocarburos), se hizo el primer balance: todas las potencias del grupo de los 20 países más importantes habían incumplido, es más, en general habían aumentado la producción de GEI.

Ahora han llegado cifras más concluyentes: los Estados Unidos, Europa, Japón, China, aumentan la carbonización. Es una estafa, y los trabajadores ya hemos pagado la estafa de la política verde.

Y al mismo tiempo se está cocinando una coalición con la extrema derecha para que la señora von der Leyen vuelva a encabezar la Comisión Europea, para repetir el éxito que han teni-

do sus recetas. Y los europeos tienen que votar para dar una apariencia de legitimidad a esa renovación, que sin duda será bienvenida por las multinacionales que están haciendo beneficios sin precedentes con ese proceso de carbonización.

La reelección de von der Leyen irá acompañada, al parecer, de un papel en la Unión Europea para la Sra. Ribera, que aquí urge la aplicación de las medidas verdes, que se burla de los campesinos diciendo que las medidas verdes no les obligan a abandonar sus cultivos cuando todos los campesinos de Europa se han levantado protestando de estas medidas que en España se han aplicado con el impulso de Ribera.

Facturas falsas

Además de los campesinos, los trabajadores del automóvil, y todos los que trabajan para la industria del automóvil, tienen las mismas quejas.

En estas páginas un artículo (ver IO 390 pag. nº3) del sindicalista Pablo García Cano denunciaba la estafa que es el incumplimiento por Ford de sus compromisos con los trabajadores de Almusafes, en nombre del coche eléctrico. Los coches eléctricos se retrasan, primero porque los precios de la energía apoyados por la Unión Europea son un obstáculo, segundo porque no es justificado que haya que exterminar los coches convencionales, tercero porque la población trabajado-

ra se queda sin dinero para comprar eléctricos y cuarto porque los propios fabricantes no gastan para su supuesta transición.

Los que pagan la transición son los 2,4 millones de trabajadores del automóvil en Europa. Todas las multinacionales tienen ERTE y ERE, que son el resultado de la primera embestida en nombre de un supuesto coche verde. Y anuncian que las plantillas que quedan no están garantizadas, porque el cambio a verde las tiene condenadas a brutales recortes.

Los fabricantes se concentran en que el Gobierno financie la fabricación de baterías, la preparación de coches verdes, el supuesto nuevo negocio verde, condenando al paro a millones de trabajadores europeos.

Los últimos datos son que los eléctricos e híbridos cubren el 48% de las ventas de coches, y el resto los coches convencionales. Pero los híbridos son la gran mayoría de ese 48%. Los planes eléctricos dan subvenciones a las empresas pero condenan a la desaparición al 80% de la producción actual.

Y ya tienen preparado el dispositivo europeo para acuciar e imponer la destrucción masiva de puestos de trabajo, votemos lo que votemos. Y desde luego los que voten por el PSOE lo harán en contra del PP-Vox, pero no para que Ribera, colaborando con Leyen, destruya la agricultura ni la industria.

Manuel Cusó

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

Información Obrera busca, con el intercambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de unidad.

Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.

Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con la posición del comité de redacción.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Xabier Arrizabaló, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

C/ DESEÑAÑO 12, 1ª3A 28004 MADRID

91 522 23 56 TLF-FAX: 91 521 72 01

io@informacionobrero.org

www.informacionobrero.org

Calendario Republicano 2024



Información Obrera difunde como material de apoyo, un bonito calendario republicano para el año 2024.

Puedes pedirlo en nuestro correo:

io@informacionobrero.org o a cualquiera de nuestros distribuidores.

¡Reserva tu ejemplar!

¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!

Movilización mundial contra el genocidio palestino

El abismo que separa a los dirigentes mundiales imperialistas de las masas es cada vez más profundo. El genocidio del pueblo palestino perpetrado por el Estado sionista de Israel y la creciente indignación de todos los pueblos del mundo lo están evidenciando con enorme crudeza.

Y de nuevo es la juventud, tan frecuente como injustamente acusada de pasividad, la que toma las riendas de la batalla en defensa del pueblo palestino y por el alto el fuego inmediato.

Iniciándose la movilización en el corazón mismo del imperio, con la ocupación de los estudiantes de muchas de las principales universidades estadounidenses, la juventud estudiantil del mundo entero les ha seguido los pasos: Francia, España, Italia, México, Australia... Incluso en el seno mismo del Estado de Israel, que atraviesa una crisis sin precedentes.

En todos los continentes tienen lugar inmensas movilizaciones por el alto el fuego y el cese de envíos de armas. Más de un millón de personas

recorrieron las calles del Reino Unido contra el genocidio. El rechazo que provoca afecta también a los dirigentes cómplices por acción u omisión, incluido el Labour Party que ha resultado castigado en unas elecciones parciales. Los pueblos del Magreb y de Oriente Medio se levantan asimismo contra sus dirigentes que colaboran con el genocidio o no se oponen decididamente al mismo.

En el centro mismo de Europa, en los países más «avanzados», como Alemania y Francia, los Gobiernos de Scholz y Macron prohíben las reuniones públicas y manifestaciones por Palestina, deteniendo a militantes y abriendo acciones judiciales contra ellos. Los dirigentes de las confederaciones no presentan la más mínima batalla contra estos atropellos a las libertades más elementales. Parece bastante claro que el rumbo represivo emprendido por los Gobiernos obedece al pánico que sienten ante la cólera creciente de la población que, evidentemente, no pueden detener por otros medios, y seguramente tampoco por los que están utilizando.

El genocidio establece una línea de demarcación clara y neta. No caben posiciones intermedias, no hay claroscuros. O se rompe con los Gobiernos imperialistas promotores de guerra y miseria, o se aceptan de hecho sus planes destructivos. Hay en todas partes una aspiración a agruparse de los que quieren resistir y oponerse a sus Gobiernos.



Tel Aviv - 18 de mayo



Tanger - 15 de mayo

En Francia, las parlamentarias Mathilde Panot y Rima Hassan de La France insoumise están siendo investigadas judicialmente a causa de la posición inamovible de su organización por el alto el fuego en Palestina y el cese del envío de armas. Y no solo ellas, también están siendo perseguidos los responsables sindicales y los estudiantes movilizados en apoyo al pueblo palestino. Macron no tiene reparo alguno en hacer suyas las políticas de la extrema derecha.

En Alemania, la corriente de Sahara Wagenknecht mantiene esas mismas posiciones, teniendo que afrontar un clima de histeria desatada que lleva a identificar a sus miembros con defensores del nazismo. Es la eterna trampa consistente en tachar de

antisemitas a los antisionistas. Pero la mentira tiene las patas cortas y son las propias organizaciones judías, principalmente en Estados Unidos, las que se están encargando de desenmascararla, con manifestaciones y protestas en las que señalan con claridad: «No en nuestro nombre».

Y en todos los países de Europa, al tiempo que se aprueban desorbitados presupuestos bélicos (y precisamente para poder aprobarlos), se recortan los presupuestos sociales hasta extremos nunca vistos. En esa Europa que nunca más verá la guerra, y en la que ya han muerto, según las cifras oficiales proporcionadas por los Gobiernos, un millón de personas en la guerra de Putin, Zelenski y la OTAN. ¡Vuestras guerras, nuestros muertos!

En Asia, las tensiones organizadas por los Estados Unidos contra China hacen temer también el estallido de conflictos de consecuencias incalculables.

En África, como siempre, se alimentan las tensiones entre los diferentes pueblos que, sin embargo, tienen un objetivo común: resistir a la ocupación militar y dominación imperialista de sus países. Intentar enfrentarlos es el único modo de desviar la indignación popular de ese objetivo.

El momento es gravísimo y, como siempre, la única barrera para frenar la barbarie galopante es la movilización de los jóvenes y los trabajadores del mundo.

Isabel Cerdá

Manifestaciones en las universidades de apoyo a Palestina

Estados Unidos

La movilización estudiantil en Estados Unidos por Palestina es la más poderosa de la historia de este país, superando incluso en magnitud a la que se desarrolló contra la guerra de Vietnam. Una movilización que el Gobierno estadounidense ha intentado parar con los métodos más brutales sin lograrlo. Hay que tener en cuenta el papel que tiene el Gobierno estadounidense en el genocidio en curso. Si los envíos de armas al Estado sionista se paralizasen, al ritmo actual en tres días escasos su Ejército estaría falto de material bélico.

Conscientes de ese papel protagonista en la masacre palestina, los estudiantes estadounidenses son los primeros en interpelar a su Gobierno con diversas acciones en las universidades.

Universidad Morehouse, en Atlanta (Georgia, Estados Unidos), 19 de mayo: Mientras el presidente Joe Biden recibía un diploma honorífico, muchos estudiantes abandonaron la sala para sumarse a una manifestación que se desarrollaba en el exterior, donde los jóvenes denunciaban al «genocida Joe».

El 14 de mayo, en la City University de Nueva York, la «CUNY Graduate Center»

(universidad pública), un grupo de manifestantes ocupa el hall y organiza una sentada con una lista de reivindicaciones en apoyo al pueblo palestino dirigida al presidente de CUNY. Solo se permite el acceso al interior a un pequeño grupo de estudiantes y a algunos medios de comunicación. Fuera aguarda un grupo numeroso coreando consignas de apoyo.

El mismo día en Nueva York, los estudiantes de la New School (universidad privada) se manifiestan ante el centro de recepción ocupado por los estudiantes.

Según la Agencia Reuters: «La ciudad de Nueva York ha declarado que no había habido “ningún herido” durante los arrestos en Columbia; los informes médicos dicen lo contrario».

En California, en una votación de 20.000 trabajadores de la universidad, el 79% ha aprobado la huelga en defensa del derecho a manifestarse por Palestina. «La UAW 4811 exige un apoyo al movimiento de solidaridad con Palestina. Para calmar la situación, la UC (Universidad de California) debe implicarse de forma sustancial en las preocupaciones suscitadas por los manifestantes [...]. La UAW 4811 llama a la UC a negociar pacíficamente con las

partes afectadas y lograr un acuerdo para responder a esas preocupaciones por los siguientes medios: amnistía para todos los empleados universitarios, estudiantes, grupos de estudiantes, profesores y miembros del personal que son objeto de medidas disciplinarias o detenciones a causa de las manifestaciones. Derecho a la libertad de expresión y de expresión política en el campus».

La Universidad DePaul (Chicago) ha puesto fin por la fuerza al campamento estudiantil, pero los estudiantes han salido aún más fortalecidos. Han ocupado el instituto de Política.

El lunes 20 de mayo se instala un nuevo campamento en la Universidad Drexel. La Universidad Drexel es una institución universitaria de enseñanza e investigación situada en Filadelfia (Pensilvania), en los Estados Unidos.

Italia

Se ha montado un campamento por Gaza en La Sapienza, la universidad de Roma.

Japón

En la Universidad de Hiroshima, los estudiantes invaden las oficinas de la presidencia de la universidad para reclamar el cese de toda inversión y colaboración con el Ejército y el Gobierno israelíes.

Australia

En la Universidad de Melbourne, los estudiantes se manifiestan por el alto el fuego inmediato.

Bélgica

Decenas de estudiantes de la Universidad de Anvers han ocupado el edificio del Ágora, instalando un campamento de tiendas de campaña para exigir que la universidad ponga fin a cualquier colaboración con las instituciones israelíes.

Campamento en la Universidad de Lieja.

Gran Bretaña

Concentración en la Universidad de Oxford: «Las universidades son cómplices del genocidio. Nosotros podemos hacer que eso cambie».

Marruecos

Manifestación en Casablanca en solidaridad con Palestina y Gaza y llamamiento al fin de la normalización con la ocupación israelí ante el consulado estadounidense.

Túnez

Sentada en el instituto de periodismo y ciencias de la información de la Universidad de la Manouba en apoyo a Gaza y llamando al boicot de las organizaciones internacionales que mantienen vínculos con el Estado de ocupación israelí.

Sudáfrica

Cientos de estudiantes se reúnen en la Universidad de Witwatersrand exigiendo que la Administración rompa relaciones con Israel.

Iraq

Estudiantes de la Universidad de Tecnología de Bagdad se suman al movimiento estudiantil mundial para poner fin a la guerra genocida en la Franja de Gaza, organizando diferentes actividades en las universidades.

Franja de Gaza

13 organizaciones estudiantiles firman una carta agradeciendo la solidaridad estudiantil mundial. En ella afirman:

«Nosotros, estudiantes, y el conjunto de nuestro sistema educativo en la Palestina ocupada, estamos sometidos a una agresión genocida continua: nuestras universidades bombardeadas y destruidas, nuestras organizaciones estudiantiles prohibidas y nuestros dirigentes estudiantiles sometidos a la tortura, el asesinato y el encarcelamiento masivo. Sin embargo, en Palestina y en todo el mundo, el movimiento de los estudiantes ha sido siempre una fuerza motriz de nuestra lucha por la liberación. Cuando vemos imágenes de las universidades estadounidenses hoy, recordamos nuestra historia de lucha estudiantil, así como los levantamientos de estudiantes de 1968, que desafiaron al imperialismo desde Vietnam hasta Palestina y remodelaron el rostro de Europa y de los Estados Unidos. Hoy, en 2024, el movimiento estudiantil está de nuevo a la vanguardia».



El Tribunal Penal Internacional solicita orden de arresto de Netanyahu

La resistencia del pueblo palestino ante el brutal genocidio operado por el ejército sionista, armado por los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, ha levantado sin duda la mayor movilización a escala internacional, en particular entre la juventud, y al mismo tiempo provoca una crisis profunda entre todos los regímenes y Gobiernos que colaboran de hecho en esta masacre, crisis que afecta a todas las instituciones internacionales.

Estas instituciones, como el FMI, la ONU o el Tribunal Penal Internacional fueron modeladas después de la Segunda Guerra Mundial al servicio de los vencedores, en particular de los Estados Unidos. Durante decenios han justificado su política internacional y su papel de gendarme mundial. De entrada, la propia creación del Estado de Israel en 1948 sobre las espaldas y contra el pueblo palestino.

Sin embargo la realización de un genocidio en directo y la resistencia a él ha abierto las carnes de todas las instituciones, en particular porque temen que la indignación de los pueblos y los trabajadores se dirija hacia los Gobiernos cómplices.

El anuncio del fiscal del TPI, Karim Khan, que investiga la situación en Gaza desde 2021 (mucho antes del 7 de octubre, y apoyado unánimemente por el panel de expertos que le asesoran) ha provocado un oleada mundial de reacciones. Precisemos, la solicitud de orden de detención del primer ministro

Netanyahu, de su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás (como el rey Salomón), solicitada a los tres jueces de la Cámara Prejudicial y que debe pronunciarse en la próximas semanas, tiene efectos inmediatos.

El Gobierno de los Estados Unidos lo ha rechazado indignado así como, claro está, el de Israel. Los Gobiernos europeos aparecen divididos. Frente a Alemania, Gran Bretaña o Italia, que siguen los pasos de los Estados Unidos, el Gobierno belga ha sido tajante en su apoyo al fiscal, y más moderadamente el cínico Gobierno francés.

El comisario europeo, José Borrell, recordó a los países la necesidad de respetar la decisión del TPI.

Pedro Sánchez habla de hacerse eco del sentir popular

Este miércoles 22 de mayo, en comparecencia en el Congreso, Pedro Sánchez mostró su respeto a las decisiones del TPI y anunció el reconocimiento del Estado palestino para el 28 de mayo, junto con Noruega e Irlanda. Dijo también que transmitía la posición de la mayoría de la población, incluidos muchos votantes del PP, el cual por su tradición franquista se encuentra descolocado. Informó que desde el 7 de octubre se habían anulado todas las licencias de exportación de armas, que los barcos con armas para Israel no acostarían en puertos españoles, que habían triplicado la ayuda humanitaria y otras medidas particulares.



Fiscal de la Corte Internacional, Sr. Karim Khan

Sin embargo el «sentir popular», el que se expresa en todas la manifestaciones es la ruptura total de las relaciones con Israel. Porque el reconocimiento de un Estado inexistente, o en todo caso de la Autoridad Nacional Palestina, que en la práctica y según los acuerdos de Oslo de 1993 no es más que un bantustán de Israel, odiado por la mayoría del pueblo palestino, no representa el verdadero apoyo que la mayoría exige.

Pero es una ayuda a la movilización

En efecto, toda contradicción en las instituciones internacionales y los

Gobiernos que defienden el orden imperialista sirve para ayudar a la determinación y movilización de las masas para exigir las verdaderas reivindicaciones.

Y en particular en nuestro país, la incipiente pero extendida en todo el territorio movilización de la juventud es una llamada al movimiento obrero y a sus organizaciones a abandonar la pasividad y ponerse a la cabeza de la exigencia del alto el fuego, acabar con el genocidio y aislar al Estado de apartheid de Israel.

Ángel Tubau
(22 de mayo de 2024)

Marcha a Brasilia

15.000 manifestantes han ocupado las calles de Brasilia este 22 de mayo. La marcha fue convocada por los delegados al congreso de la CUT, en octubre de 2023 y, no sin dificultades, ganó el apoyo real de algunas confederaciones y de muchos sindicatos, incluso de otras centrales.

Procedentes de varios estados, los manifestantes enarbolaron las banderas de:

- ¡Derogación de la Reforma Laboral!
- ¡Derogación de la Reforma de la Seguridad Social!
- ¡Fin de las subcontrataciones ilimitadas!



Luisa Hanune, candidata a las elecciones presidenciales de Argelia



Luisa Hanune, presidenta del Partido de los Trabajadores de Argelia

«Como se esperaba, la secretaria general del Partido de los Trabajadores (PT), Luisa Hanune, ha hecho oficial su candidatura a las elecciones anticipadas previstas para el 7 de septiembre en Argelia.

Aunque reconoce la «difícil situación política», dado el contexto geopolítico considera que las próximas elecciones son «decisivas», un «imperativo mandato que va más allá del marco electoral».

[...] «Será una lucha por la supervivencia, la existencia de nuestro país, por su integridad y, por supuesto, por la necesidad de drenar todos los depósitos de sufrimiento y desesperación», explicaba recientemente.

Militante de larga trayectoria y rostro atípico del panorama político nacional, Luisa Hanune se enfrentará en las próximas elecciones presidenciales a un nuevo reto de una carrera dedicada a luchar por Argelia, por la

causa democrática, los trabajadores, las mujeres, los olvidados y los marginados.

A los 70 años, una edad de gran madurez política, esta hija de campesinos, nacida en las montañas de Jijel solo unos meses antes del estallido de la guerra de independencia, quiere, a la vista de la situación actual, hacer de las próximas elecciones un momento de ruptura con un modo de gobernar y con unas políticas que han demostrado sus limitaciones.

«Nadie puede negar que hemos llegado a un punto en el que es absolutamente necesario y vital, especialmente en esta coyuntura mundial y regional, con todos los peligros que entraña, avanzar hacia una refundación política, institucional y constitucional», argumenta.

Luisa Hanune albergó muy pronto esta ambición de cambiar el orden político esta-

blecido, en la época del partido único y la clandestinidad.

Primero en la universidad en los años 70, donde estudió Derecho, luego en el seno de un grupo de extrema izquierda, la OST (Organización Socialista de los Trabajadores).

Un compromiso que forjó su conciencia política, por el que pagaría siendo encarcelada en los años 80.

Política de firmes convicciones, de cultura de izquierdas, sensible a la suerte de los trabajadores y de las mujeres, defendiendo con determinación la «igualdad de derechos» con los hombres, partidaria de la promoción de la lengua tamazight, Luisa Hanune funda, tras la apertura democrática en 1989, junto con sus camaradas militantes, el Partido de los Trabajadores.

Un partido al que ella daría visibilidad, sobre todo tras su participación en el «contrato de Roma», encuentro organizado bajo los auspicios de la comunidad de Sant'Egidio para explorar una solución política a la crisis argelina en un momento en que el país estaba sumido en una inusitada violencia, a resultas de la interrupción del proceso electoral en 1992.

A pesar de las presiones de un poder refractario a cualquier perspectiva democrática, Luisa Hanune siguió defendiendo la causa de los «desaparecidos» del decenio negro y abogando por la elección de una asamblea constituyente.

Reivindicaciones que defenderá contra viento y marea y contra sus detractores. A los 50 años, en 2004, Luisa Hanune entra por primera vez en la batalla electoral para las presidenciales, convirtiéndose en la primera mujer del mundo árabe en participar en unas elecciones de este tipo.

[...] La historia registrará que ella fue en parte responsable de la retirada en 2005 de la controvertida ley de hidrocarburos redactada por Chakib Khelil y considerada favorable a las multinacionales estadounidenses.

Una vida política jalonada de combates

Entre sus otros logros: una guerra sin cuartel contra la «oligarquía», término que utiliza para designar a una nueva casta de nuevos ricos que acabó haciéndose con los resortes del poder tras la enfermedad del presidente Boutefflika en 2013.

[...] Con la llegada del Hirak en 2019, ella se encuentra naturalmente del lado de los millones de argelinos que exigen un cambio profundo en el modo de gobernar.

Pero su participación en una reunión «consultiva» a la que asistió Mohamed Mediene, antiguo jefe del DRS, y Said Boutefflika, el 27 de marzo de 2019, destinada a explorar una salida a la crisis, resultaría fatal.

El entonces poderoso exjefe de Estado Mayor, el difunto Gaid Salah, decidió emprender acciones legales contra los que participaron en esta reunión.

Procesada por cargos de atentar contra la seguridad del Estado y socavar la seguridad del Ejército, Luisa Hanune fue condenada en primera instancia a 15 años de prisión firme, después a 3 años de prisión, de los cuales 9 meses de prisión firme en segunda instancia.

Liberada en febrero de 2020, su encarcelamiento provocó un clamor internacional y una ola de solidaridad, incluso entre grandes líderes mundiales, acabó por ser absuelta tras un recurso en casación.

[...] ¿Pondrán los argelinos su confianza en ella el próximo septiembre?

Es difícil aventurar un pronóstico. Pero una cosa sigue siendo cierta: sea cual sea el resultado de las elecciones, Luisa Hanune, una mujer valerosa, habrá dejado su impronta en la escena política argelina y en la lucha de las mujeres.

Una política cuyo sacrificio por hacer realidad los valores de la revolución inspirará a muchos militantes. Una mujer que nunca mudó sus convicciones, como demuestra con su inquebrantable apoyo a la causa palestina».

Leído en TSA
(periódico digital argelino, 19 de mayo)

Me abono a
INFORMACIÓN OBRERA

NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO: FECHA:

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE A NOMBRE DE MANUEL CUSO - LA CAIXA ES83 2100 2865 5813 0063 0460

6 NÚMEROS: 9 €
12 NÚMEROS: 18 €
24 NÚMEROS: 36 €
PDF, 24 NÚMEROS: 15 €



www.informacionobreroa.org